

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

País: Guatemala

Documento de Proyecto

Título de Proyecto: PAJUST II - Articulación y alianzas entre Estado y sociedad civil para el impulso de la justicia de transición.

Efectos esperados del CPD/UNDAF: Acceso a la Justicia. Las instituciones del sector justicia incrementan la eficiencia y efectividad en el esclarecimiento de casos, en los niveles de inclusión y equidad; El Estado aplica mecanismos integrales de justicia de transición para las víctimas del enfrentamiento armado interno, en coordinación con la sociedad civil, de acuerdo a los marcos internacionales de Derechos humanos.

Producto esperado del CPD; Víctimas del enfrentamiento armado interno ("EAI") gozan del pleno ejercicio de los Derechos Humanos y amplían sus medios de vida.

Socio Implementador: PNUD en coordinación con Ministerio de Cultura y Deportes - MICUDE; Ministerio de Educación – MINEDUC; Ministerio Público – MP; Organismo Judicial – OJ; Programa Nacional de Resarcimiento – PNR; Registro Nacional de Personas – RENAP; Organizaciones de la sociedad civil.

El presente proyecto se implementará como parte de la segunda fase del Programa de Acompañamiento de la Justicia de Transición – PAJUST –, y contribuirá, de manera articulada con los demás proyectos del Programa, a los efectos y productos definidos arriba. En el presente proyecto se ampliará el apoyo a instituciones del Estado y se afinarán las alianzas y los mecanismos de coordinación temática y departamental entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil, para consolidar los resultados alcanzados en el ejercicio de los derechos de las víctimas del enfrentamiento armado interno (EAI) a la verdad, la justicia, la reparación, y las medidas de no-repetición. Se fortalecerá el acceso de las víctimas del EAI a la justicia y a la reparación integral, especialmente para las mujeres víctimas de violencia sexual. Se ampliará el ámbito de acción en las medidas de no-repetición al sistema educativo y al desarrollo humano sostenible, para promover la resiliencia y la participación ciudadana de la población afectada por el EAI que en la actualidad sigue enfrentándose a problemas de pobreza extrema, vulnerabilidad y exclusión. Se asegurará el enfoque de género y de los pueblos indígenas mediante la inclusión de las perspectivas y prioridades de víctimas, especialmente mujeres e indígenas; se promoverá asimismo, la participación igualitaria y empoderamiento de las mujeres víctimas para incidir en la transformación de roles. Se promoverán estrategias de sostenibilidad e institucionalización para garantizar la continuidad de los resultados. Se focalizará una intervención integral de las acciones para empoderar a las víctimas del EAI como sujetos de derechos, al nivel territorial, iniciando en el departamento más afectado por el EAI, el Quiché – específicamente en el área Ixil - con perspectiva de replicar el modelo en los otros departamentos mayormente afectados por el EAI (Huehuetenango, Chimaltenango, Alta y Baja Verapaz).

Período del Programa: 01 de Abril 2015- 31 de diciembre 2018

Efectos (Plan Estratégico PNUD 2014-2017):

Efecto 2: Satisfacción de las expectativas de los ciudadanos respecto de la participación, desarrollo, Estado de Derecho y responsabilidad con sistemas más sólidos de gobernanza democrática.

Efecto 3: Instituciones de los países fortalecidas para dar acceso universal en forma progresiva a los Servicios básicos.

Atlas Award ID: 00087881

Start date: 1 abril 2015

End Date : 31 diciembre 2018

Gender marker 2

Total resources required:

- Regular:
- Other: \$4,189,825.62
 - Donor Suecia

Agreed by (Implementing Partner):

Agreed by UNDP:



I. ANÁLISIS SITUACIONAL

Entre 1960 y 1996 Guatemala sufrió un enfrentamiento armado interno durante el cual se cometieron de forma sistemática y generalizada graves violaciones a los derechos humanos. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico - CEH - registró un total de 42,275 víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, concluyendo que el 83% de las víctimas del enfrentamiento armado pertenecía a pueblos mayas. Combinando estos datos con otros estudios realizados sobre violencia política en Guatemala, la CEH estimó que el total de muertos y desaparecidos en el enfrentamiento armado llegó a más de 200,000 personas. De igual manera afirma que las fuerzas del Estado y grupos paramilitares afines fueron responsables del 93% de las violaciones documentadas por la CEH, mientras que el 3% fueron atribuidas a la guerrilla. Los departamentos en donde se cometieron la mayoría de las graves violaciones a los derechos humanos y hechos de violencia fueron Quiché (46%), Huehuetenango (16%), Alta Verapaz (9%), Chimaltenango (7%) y Baja Verapaz (5%). El Informe de la CEH incluyó una amplia gama de recomendaciones en materia de justicia, verdad, reparación y no repetición, entre las cuales se incluyen medidas de dignificación de las víctimas, su reparación integral, la averiguación del paradero de los desaparecidos, y medidas para el pleno respeto de los derechos humanos¹.

El cumplimiento de las recomendaciones de la CEH ha sido promovido en Guatemala durante los últimos 15 años como parte del proceso de justicia de transición. Según las Naciones Unidas, la justicia de transición se define como:

“... toda la variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación.”²

Desde la perspectiva de los derechos humanos, la justicia de transición tiene como objetivo principal la promoción de un respeto efectivo de los derechos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos a la verdad, a la justicia, a la reparación así como a medidas de no-repetición³.

Desde el fin del enfrentamiento armado interno en 1996 con la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, diversos procesos de justicia de transición han sido implementados en Guatemala, algunos apoyados desde PNUD. El Programa de Acompañamiento a la Justicia de Transición – PAJUST–

¹ Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), *Guatemala: Memoria del Silencio* (1999).

² Informe del Secretario General de las Naciones Unidas (S/2004/616), “El Estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos”.(párrafo 8).

³(E/CN.4/2005/102/Add.1, 8 de febrero de 2005)

(2010-2014) de PNUD fue diseñado para contribuir al Efecto de Justicia de Transición incluido en el Documento de Programa de País de PNUD (2010-2014): *“El Estado ha desarrollado políticas y programas orientadas a garantizar la justicia de transición”*. Este enfoque refleja el enfoque de derechos humanos en la programación del desarrollo, poniendo énfasis en la responsabilidad del Estado como *portador de obligaciones* bajo el derecho internacional y nacional para promover y proteger los derechos de las víctimas. Paralelamente, el Programa apoyó el empoderamiento de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil para conocer, demandar y ejercer sus derechos, y de construir alianzas con el Estado para lograr su realización.

El Programa PAJUST trabajó con 6 instituciones estatales y más de 30 organizaciones de la sociedad civil, en el marco de los componentes de Verdad, Justicia, Reparación y Medidas de No Repetición, promoviendo una coordinación activa alrededor de diversas iniciativas al nivel local, regional y nacional. Después de 5 años de implementación el Programa ha contribuido a resultados contundentes en favor de la justicia de transición entre los cuales se incluyen:

- Más de 17,000,000 documentos de los archivos del ex-Policía Nacional organizados, clasificados, digitalizados y accesibles al público y a las instituciones de la justicia por parte del Archivo Histórico de la Policía Nacional - AHPN (MICUDE).
- Avances sustanciales en 20 casos paradigmáticos de violaciones a los derechos humanos, apoyando a 2,626 víctimas (1,534 mujeres y 1,092 hombres), incluyendo 106 mujeres víctimas de violencia sexual durante el EAI, incluyendo 10 sentencias condenatorias.
- Más de 1500 exhumaciones en cementerios clandestinos a nivel nacional, permitiendo la identificación de alrededor de 2000 víctimas para que sus restos sean devueltos a sus familiares para su dignificación, brindando atención directa a un total de 13,179 víctimas. de las cuales 59% eran mujeres y el 41% hombres⁴.
- Más de 20,000 familiares de víctimas han recibido apoyo legal y psicosocial en el proceso de búsqueda de los restos de sus seres queridos fallecidos o desaparecidos.
- Implementación de mecanismos para la formación de funcionarios estatales, monitoreo y resolución de conflictos a nivel departamental, seguimiento del cumplimiento de obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, en coordinación con más de 50 entidades estatales.
- Mecanismos altamente efectivos de coordinación de entre socios – tanto del Estado como de la sociedad civil - en los diversos componentes del Programa.

⁴ Informe Final de FAFG, Enero 2015.

Desde el inicio de PAJUST en 2010, la importancia del abordaje *integral* de la justicia de transición que el Programa promueve - de modo que los elementos de la búsqueda de la verdad, las iniciativas de justicia, la reparación y las garantías de no repetición se complementen y refuercen - ha sido reiterada y respaldada por las Naciones Unidas, incluyendo por el Secretario General⁵ y por el Relator Especial por la promoción de la verdad, justicia, reparación y garantías de no-repetición, Pablo de Greiff⁶. En adición, la importancia del abordaje adoptado por PAJUST, que enfoca en el *fortalecimiento de capacidades nacionales* (tanto de las instituciones del Estado como de la sociedad civil), y la promoción de la *participación* de las víctimas también ha sido confirmada⁷.

Sobre la base de los resultados alcanzados, y tomando en cuenta las recomendaciones del Informe Final de la Evaluación de Medio Término del PAJUST⁸, en la segunda fase del PAJUST se contribuirá al Efecto esperado del CPD/UNDAF 2015-2019: *“El Estado aplica mecanismos integrales de justicia de transición para las víctimas del conflicto armado interno, en coordinación con la sociedad civil, de acuerdo a los marcos internacionales de Derechos humanos,”* y el Producto esperado del CPD 2015-2019: *“Víctimas del EAI gozan del pleno ejercicio de los Derechos Humanos y amplían sus medios de vida”*.

A. Componente Verdad

El acceso al derecho a la verdad acerca de los acontecimientos del enfrentamiento armado interno en Guatemala ha avanzado significativamente en los 15 años desde la emisión del Informe de la CEH, *“Guatemala: Memoria del Silencio”*, en 1999. Mediante mecanismos claves como el acceso a archivos del periodo del EAI, la búsqueda e identificación de personas desaparecidas, e iniciativas de la memoria histórica, se avanzado en el empoderamiento del ejercicio de este derecho tanto por parte de las víctimas como por la sociedad en general, y se ha fortalecido el cumplimiento por parte del Estado de sus correspondientes obligaciones. Como resultado del apoyo a instituciones estatales y la sociedad civil en la primera fase del PAJUST (2010-2014), así como el apoyo de PNUD en proyectos anteriores, se ha logrado la digitalización y puesta a disposición del público más de 17,000,000 de documentos del Archivo Histórico de la Policía Nacional – AHPN, la identificación de más de 1,975 personas víctimas de desapariciones forzadas y masacres durante el EAI, y la generación de múltiples procesos de recuperación de la memoria histórica con grupos de víctimas al nivel comunitario. Sin embargo, todavía existen importantes retos para consolidar los avances logrados y preservar del olvido la memoria

⁵ Ver Guidance Note of the Secretary General: United Nations Approach to Transitional Justice (Inter-office Memorandum, 10 March 2010); Guiding Principle 8, page 2.

⁶ Ver Informes Anuales 2012 y 2013 del Relator Especial sobre la promoción de verdad, justicia, reparación y garantías de no-repetición (A/HRC/21/46) and (A/HRC/24/42).

⁷ Idem; additionally, UNDP Discussion Paper *Complementarity and Transitional Justice: Synthesis of Key Emerging Issues for Development* (2012) and UNDP *Addressing the Past to Build a Better Future: UNDP's Experiences on Transitional Justice for Human Development in Latin America and the Caribbean* (2013).

⁸ Informe Final de Evaluación de Medio Término PAJUST, Nordic Consulting Group (NCG), 27.06.14.

colectiva, y proporcionar una salvaguardia fundamental contra la repetición de graves violaciones a los derechos humanos en el futuro⁹.

La plena institucionalización del AHPN dentro de la estructura del Ministerio de Cultura y Deportes - MICUDE, para lograr su sostenibilidad política, financiera y técnica, es un proceso aun por completarse. Adicionalmente, es necesario continuar el procesamiento archivístico y la puesta a disposición del público - y en particular para las instituciones de justicia, los usuarios principales de los archivos hasta la fecha - de fondos documentales prioritarios tanto del AHPN como otros fondos documentales, tales como del Estado Mayor Presidencial y los documentos desclasificados del Ejército de Guatemala, ambos en la custodia del Archivo General de Centro América – AGCA. Finalmente, el marco normativo que regula el manejo por parte de las instituciones del Estado de sus archivos, está débil debido a que no existe una ley específica en la materia, a pesar de la presentación de varias iniciativas que se encuentran pendientes de aprobación.

Por otro lado, en relación con el esclarecimiento del paradero de personas desaparecidas durante el EAI, la ausencia de una institución estatal con un mandato para la búsqueda de personas desaparecidas¹⁰ – a pesar de una iniciativa de ley en el Congreso para la creación de dicha entidad - representa un importante desafío. Ante tal ausencia, organizaciones de víctimas y entidades no-estatales han asumido la tarea de buscar a los desaparecidos. En particular, la Fundación de Antropología Forense de Guatemala – FAFG – ha desarrollado un *Sistema Multidisciplinario de Identificación Humana SMIH* - que ha resultado ser efectivo para lograr identificaciones mediante una combinación de elementos de antropología social y forense, arqueología, así como la genética forense vía un Banco Genético y uso de tecnología de análisis de ADN. En tanto se establezca una institucional estatal con el mandato de buscar a las personas desaparecidas, se requiere continuar fortaleciendo la implementación del SMIH, y en particular en los departamentos más afectados por el enfrentamiento, para maximizar su potencial y dar respuesta a los familiares – incluyendo un alto porcentaje de mujeres - que aún esperan conocer el paradero de sus seres queridos.

Adicionalmente a sus resultados en esclarecer el paradero de personas desaparecidas, la FAFG también ha aportado de manera significativa a la búsqueda e identificación de víctimas del enfrentamiento armado interno en general. La FAFG ha sido responsable para la gran mayoría de exhumaciones de cementerios clandestinos del país, para la recuperación de las osamentas, su identificación utilizando diversos métodos, incluyendo la tecnológica de ADN, y su retorno a sus familiares para un entierro digno. Este trabajo, que tiene una función para devolver la verdad, pero

⁹ Principio 3: Deber de Recordar, Conjunto de Principios Actualizado para Protección y la Promoción de los Derechos Humanos mediante la lucha contra la impunidad (E/CN.4/2005/102/Add.1)

¹⁰ Que incluye tanto víctimas de desapariciones forzadas como otras formas de desaparición.

aporta a su vez a la justicia, la reparación y la no-repetición, ha sido una parte significativa del PAJUST y también de programas anteriores de PNUD¹¹. Es necesario asegurar la continuidad de los procesos de exhumaciones para devolver la verdad a las víctimas, especialmente en los departamentos más afectados y en coordinación con la estrategia de investigación y persecución penal de casos del EAI promovida por el Ministerio Público.

Con respecto a la memoria histórica, mientras existe un enorme acervo de información acerca del EAI, así como una amplia gama de iniciativas, en diversas formas, de la memoria histórica desde las víctimas, la difusión de, y dialogo sobre, esta información y estas iniciativas no sido suficientemente amplia¹². Es necesario crear mecanismos que permiten dar a conocer la información que existe sobre el enfrentamiento, incluyendo las iniciativas de las víctimas, y particularmente de las mujeres víctimas. Asimismo, aún falta promover diálogos sociales para incidir en la creación de una masa crítica que entienda las dimensiones de la tragedia del enfrentamiento, su legado en el presente, y por ello, las necesarias rutas de la justicia de transición hacia un fortalecimiento del Estado de Derecho y la consolidación de la paz.

B. Componente Justicia

El acceso a la justicia para las víctimas del EAI ha mejorado significativamente en los últimos 5 años. El PAJUST ha jugado un rol crucial en este ámbito en su primera fase. Tal como concluye la Evaluación de Medio Término de PAJUST: *"El componente Justicia... logró en cuatro años el mayor número de procesos penales y sentencias condenatorias sobre el EAI en la historia de Guatemala. Más allá de lo cuantitativo, PAJUST es artífice de logros irreversibles en el tema justicia que generan confianza de la ciudadanía en el Sistema de Justicia nacional, especialmente en el Ministerio Público"*. Mediante una estrategia concertada de apoyo a la sociedad civil para la asesoría de las víctimas y el litigio estratégico de casos paradigmáticos, combinada con procesos de fortalecimiento institucional de la Fiscalía de Sección de Derechos Humanos del MP - FSDH, así como la Unidad de Averiguaciones Especiales - UAE-, de la Institución del Procurador de los Derechos Humanos - PDH-, se lograron avances sustanciales en 20 casos paradigmáticos de violaciones a los derechos humanos. En 9 de estos casos - incluyendo casos de desapariciones forzadas, masacres y genocidio - se lograron 11 sentencias nueve condenatorias, una condenatoria-anulada y una absolutoria.

¹¹ El Programa Dignificación y Atención Psicosocial a Víctimas del enfrentamiento Armado" (DIGAP) se implementó desde 2004 a 2008 en apoyo a la FAFG y las organizaciones de acompañamiento psicosocial y jurídico-social.

¹² La Evaluación de Medio Término del PAJUST, concluyó que su contribución a la Verdad en el sentido de mayor conocimiento sobre los acontecimientos sucedidos en el pasado y el rescate de la memoria colectiva como salvaguardia contra la repetición de tales violaciones, ha sido limitada" (NCG, Informe, 27.06.14, página 48, párrafo 4.)

Sin embargo, la gran mayoría de los casos de graves violaciones a los derechos humanos del enfrentamiento permanecen en la impunidad. Un factor contribuyente es la falta en el Ministerio Público de una explícita estrategia de investigación y persecución penal de los casos del enfrentamiento armado. Aun reconociendo que el procesamiento de los responsables de todas las violaciones a los derechos humanos cometidas en el EAI es imposible¹³, la implementación de una estrategia de investigación y persecución penal, basada en el análisis criminal estratégico y que incluya una clara priorización, focalización y conexión temática o geográfica de los casos, aumenta la posibilidad de lograr mayor impacto en los casos que llegan a juicio. El Ministerio Público, en los últimos años, gracias también al apoyo del PNUD, ha desarrollado nuevas metodologías de análisis criminal para promover una persecución penal estratégica de fenómenos criminales de gran escala, lo cual ha redundado en el aumento significativo de la efectividad de la investigación criminal. Sin embargo dicha metodología de análisis no se ha implementado aun en la FSDH y podría representar una oportunidad importante para la optimización de la investigación de los casos del EAI. Otros factores adicionales que contribuyen a los altos niveles de impunidad en casos del enfrentamiento armado son la falta de conocimiento pleno de las víctimas de sus derechos y de cómo ejercerlos, los traumas psicológicos sufridos, los patrones culturales como la discriminación y desigualdad de género, que aunados a un marco lingüístico diferente al español, son obstáculos que contribuyen al limitado acceso de víctimas indígenas y de las mujeres indígenas, al sistema de justicia. Una lección aprendida de la primera fase del PAJUST es la importancia de asegurar acompañamiento psicosocial así como traductores e intérpretes culturales para las víctimas, para asegurar su participación efectiva en el proceso y minimizar los riesgos de una re-victimización, especialmente para las mujeres víctimas. La Evaluación de Medio Término del PAJUST recomendó específicamente: *“Valorar la pertinencia del abordaje psicojurídico en los casos del EAI, para guiar la acción judicial hacia el respeto de los intereses y la voluntad de las víctimas”*¹⁴.

Otro factor que contribuye a la impunidad en casos del EAI es el débil conocimiento por parte del Organismo Judicial –OJ–, de los estándares internacionales en materia de graves violaciones a los derechos humanos constitutivas de crímenes internacionales. Procesos incipientes de formación con jueces del Organismo Judicial en Guatemala están pendientes de estandarizarse e institucionalizarse, mediante, por ejemplo, la creación de una malla curricular sobre los estándares y principios internacionales para el juzgamiento de graves violaciones a los derechos humanos y delitos internacionales, en la Escuela de Estudios Judiciales del OJ.

En adición a los procesos de fortalecimiento institucional de las diversas entidades estatales, se reconoce que los querellantes adhesivos y las organizaciones de la sociedad civil han jugado un papel clave en conseguir los resultados históricos en los procesos de justicia para las víctimas del

¹³ Ver Informe del Relator Especial para la promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y la No-repetición, Sr. Pablo de Greiff, Agosto 2014 (27 agosto 2014) (A/HRC/27/56), página 7. V.33.

¹⁴ Ver Informe Final de Evaluación de Medio Término, NCG Consulting, Informe, 27.06.14, página 55.

enfrentamiento. La Evaluación de Medio Término de PAJUST lo evaluó como una buena práctica: *“Es muy positivo que el programa vinculara a las organizaciones querellantes con el MP y que las organizaciones facilitaran investigaciones al MP y le capacitaran sobre temas de su especialidad relacionadas con el litigio estratégico.”*¹⁵, y se recomendó continuar apoyando a los querellantes adhesivos en el impulso de los casos judicializados.

El apoyo tanto a los querellantes, como a las organizaciones asesoras, y la facilitación de su articulación con el MP y la PDH, ha sido una estrategia exitosa, especialmente tomando en cuenta la complejidad de los delitos que se investigan, y los múltiples desafíos que presenta la investigación de hechos cometidos hace más de 30 años. El fortalecimiento de dichos espacios, y la creación de nuevos mecanismos de coordinación, en el marco de una estrategia de investigación y persecución penal, será clave.

Junto al rol de la sociedad civil en el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones para investigar y juzgar los casos del enfrentamiento, también se reconoce la importancia de su importante papel en realizar monitoreo y auditoría social sobre la actuación de las instituciones del sector justicia en relación a la justicia de transición.

C. Componente Reparación

La institución estatal con el mandato específico para el resarcimiento de las víctimas del enfrentamiento armado interno es el Programa Nacional de Resarcimiento – PNR. Dicho programa fue creado mediante Acuerdo Gubernativo 258-2003, para un plazo de 10 años. En diciembre 2013, mediante Acuerdo Gubernativo 539-2014, el Programa fue prolongado para un plazo adicional de 10 años. Durante los primeros diez años de implementación, el Programa logró la implementación de algunas medidas de resarcimiento, sin embargo la implementación *integral* de las cinco medidas – siendo dignificación, resarcimiento cultural, reparación psicosocial y rehabilitación, restitución material, y resarcimiento económico¹⁶ en beneficio de las víctimas ha sido siempre un desafío importante. Hay factores metodológicos y procedurales, que han implicado una tendencia de priorizar la implementación de una medida sobre las demás – por ejemplo, el resarcimiento económico o el resarcimiento material – o de implementar las medidas de resarcimiento de manera aislada uno del otro, o de forma reactiva a las demandas de las víctimas. Es necesario promover una planificación proactiva a partir de un análisis del universo de víctimas, un ejercicio de priorización y la aplicación de una metodología para asegurar que la atención a las víctimas sea lo más integral posible en el sentido de abarcar tanto la dignificación de la persona así como la reparación de los daños psicosociales, culturales, materiales y económicos

¹⁵ Informe Final de Evaluación de Medio Término, NCG Consulting, Informe, 27.06.14, página 50, Buenas practicas 2 y 3.

¹⁶ Acuerdo Gubernativo 619-2005; Acuerdo Gubernativo 539-213.

sufridos a raíz de las violaciones de sus derechos humanos, tal como establecen los estándares internacionales¹⁷ y el mismo mandato el Programa¹⁸.

Desde la creación del PNR, otro desafío para la implementación integral de las medidas de resarcimiento ha sido el relacionamiento con las diversas organizaciones de víctimas. Por un lado, a pesar de ser un mecanismo de consulta previsto desde 2005¹⁹, nunca se constituyó el Consejo Consultivo de Organizaciones de Víctimas. Por otro lado, existen cientos de Comités de Víctimas al nivel nacional, la mayoría de los cuales están aglutinados en organizaciones de víctimas, siendo el Movimiento Nacional de Víctimas Qanil Tinamit, la Red de Organizaciones Sociales y de Víctimas, y el Consejo de Víctimas. La separación de los Comités entre estas tres vertientes, y a veces los conflictos y competencias entre ellos, ha sido otro factor que ha complicado el relacionamiento de las víctimas con el PNR y los procesos para lograr una efectiva implementación de las medidas de resarcimiento de forma integral.

En la primera fase de PAJUST, hubo avances en el proceso de fortalecimiento de la institucionalidad del PNR para mejorar su capacidad de implementar las medidas de resarcimiento, en relación con la implementación de ciertas medidas específicas, como una propuesta para la incorporación de un enfoque de género en la Política Nacional de Resarcimiento y el diseño de un Plan de Atención Integral a mujeres víctimas de violencia de género y violencia sexual durante el EAI, así como en la creación de mecanismos de coordinación con las organizaciones de víctimas al nivel regional a través del establecimiento de mesas técnicas y en relación con el resarcimiento a víctimas en procesos de exhumaciones e inhumaciones. Sin embargo, es necesario continuar y fortalecer dichos procesos para lograr cambios institucionales así como una mejor coordinación con las víctimas y sus organizaciones al nivel departamental – y en particular focalizado atención a los lugares más afectados por el enfrentamiento - en función del resarcimiento integral.

El acceso a la documentación personal de las víctimas del enfrentamiento – tanto las víctimas fallecidas o desaparecidas como las víctimas sobrevivientes – ha sido un desafío permanente para lograr su reparación. Muchas de las víctimas fallecidas nunca contaron con documentos de identificación, particularmente las mujeres, (debido a patrones históricos de discriminación hacia la mujer guatemalteca) – tales como Partida de Nacimiento o Cédulas – o cuando los tuvieron²⁰, fueron perdidos o destruidos durante el enfrentamiento y nunca repuestos. La falta de dichos documentos implica

¹⁷ Ver, por ejemplo, los Principios y Directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones: Resolución 60/147 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 16.12.2005.

¹⁸ Ver Acuerdo Gubernativo 539-213.

¹⁹ El mecanismo del Consejo Consultivo fue introducido mediante el Acuerdo Gubernativo 619-2005 que reformó el AG 258-2003.

²⁰ En algunos casos, debido a patrones culturales, las mujeres no eran inscritas, por el hecho de ser mujer.

obstáculos para obtener un Certificado de Defunción, necesario para su inhumación. Por otro lado, las víctimas sobrevivientes a menudo también carecen de documentación personal, lo cual dificulta su acceso tanto a medidas de resarcimiento como el ejercicio de sus derechos en general. Durante la primera fase de PAJUST, mediante convenios de cooperación y otros mecanismos, entre instituciones como el PNR, la FAFG y el Registro Nacional de Personas – RENAP - se logró iniciar un proceso de sensibilización del personal del RENAP sobre la problemática, y la documentación de algunas víctimas. Sin embargo, es necesario profundizar conocimientos sobre las diversas dificultades que experimentan las víctimas, en particular, los persistentes obstáculos que afectan principalmente a la mujer, y elaborar rutas de solución que podrían incluir tanto medidas legislativas como institucionales o inter-institucionales para brindar el acceso de documentación tanto a hombres como a mujeres. La importancia de trabajar directamente con el RENAP para abordar las dificultades de documentación fue reconocida en el Informe Final de la Evaluación de Medio Término, recomendando su participación directa en una nueva fase²¹.

En adición a las entidades estatales, la sociedad civil ha jugado un rol amplio e importante en la promoción de la reparación de las víctimas del enfrentamiento. Tal como se ha detallado anteriormente, la FAFG ha sido responsable para la gran mayoría de exhumaciones de cementerios clandestinos del país. Este trabajo, que tiene una función profundamente reparadora pero aporta a su vez a la verdad, la justicia y la no-repetición, ha sido una parte significativa del PAJUST y también de programas anteriores de PNUD²². Además del apoyo a la FAFG para realizar su trabajo antropológico-forense, se han apoyado varias organizaciones especializadas en brindar acompañamiento psicosocial y jurídico-social a las víctimas en dichos procesos, atendiendo directamente más de 20,000 personas de un aproximado de 800 familias. De estos, más de 12,000 mujeres han sido atendidas directamente, y hasta 17,000 mujeres indirectamente. El trabajo de la FAFG junto con las organizaciones de acompañamiento fue valorado positivamente en el Informe de la Evaluación de Medio Término de PAJUST, lo cual calificó como: *“fundamental para la ubicación e identificación de personas ejecutadas o desaparecidas durante el EAI, y en la obtención de prueba científica para esclarecer la verdad de casos paradigmáticos. Asimismo, ha contribuido a que cientos de familias pudieran exhumar e inhumar los cuerpos de sus seres queridos y recibir acompañamiento jurídico y psicosocial en estos procesos, para por un lado empoderarlos como titulares de derecho y por el otro, fortalecerlos emocionalmente para superar el duelo alterado que experimentan producto de la violencia política”*. La coordinación entre la FAFG, las organizaciones psicosociales y jurídico-sociales y el PNR, se fortaleció durante 2014 con el establecimiento de mesas de coordinación al nivel departamental que han logrado agilizar los procesos en favor de las víctimas. Sin embargo, por diversas razones siguen habiendo un acumulado

²¹Ver Informe Final de la Evaluación de Medio Término PAJUST. Ídem, Pagina 56.

²²El Programa Dignificación y Atención Psicosocial a Víctimas del enfrentamiento Armado” (DIGAP) se implementó desde 2004 a 2008 en apoyo a la FAFG y las organizaciones de acompañamiento psicosocial y jurídico-social.

grande de osamentas aun sin entregar, y los tiempos de espera – cuando son prolongados – arriesga una re-victimización de las familiares. Por ello, el Informe Final de la Evaluación de Medio Término recomendó en el marco de la Reparación de *“priorizar las inhumaciones para cerrar ciclos con enfoque de dignificación de las víctimas”*²³.

Por otro lado, mientras se ha enfocado el apoyo a las víctimas en los aspectos *psicosociales y jurídico-sociales* en el marco de las exhumaciones e inhumaciones, es necesario promover una mayor *integralidad en la atención* a estos familiares, en reconocimiento que procesos de exhumación e inhumación forman solo una parte del derecho a la reparación integral que asiste a víctimas del enfrentamiento, y que la reparación a su vez debe ir acompañada de procesos de verdad y justicia así como garantías de no-repetición. Adicionalmente, tal como identificó el Informe Final de la Evaluación de Medio Término, es necesario fortalecer la coordinación entre los socios en el terreno para evitar duplicaciones y competencias, trabajar para mejorar una homogenización de los estándares de atención, así como la relación con el Estado.

En adición al rol de la sociedad civil en el impulso de las exhumaciones e inhumaciones, también se reconoce un rol importante en acompañar procesos de fortalecimiento organizativo de agrupaciones de víctimas para poder articular demandas de resarcimiento integral frente al PNR, así como para el monitoreo y auditoría social de procesos de resarcimiento para exigir transparencia en la gestión y una adecuada rendición de cuentas.

D. Componente No-Repetición

El concepto de las medidas de no-repetición es amplio, y puede abarcar diversos procesos orientados a producir cambios tanto normativos, institucionales, culturales y sociales con el fin de asegurar que las víctimas no pueden volver a ser objeto de violaciones de sus derechos²⁴.

Durante la primera fase de PAJUST, mediante los socios principales la Comisión Presidencial por los Derechos Humanos – COPREDEH, y el Instituto Internacional de Aprendizaje para la Reconciliación Social - IIARS - se apostó al fortalecimiento de los conocimientos y niveles del cumplimiento con los derechos humanos por parte del Ejecutivo²⁵, y procesos educativos dirigidos a funcionarios del Estado y jóvenes estudiantes para sensibilizar estos sectores sobre las causas profundas del enfrentamiento armado interno – por ejemplo el racismo, la discriminación, la desigualdad, entre otras – y promover relaciones inter-étnicas y la convivencia pacífica. A través de los distintos diplomados implementados

²³ Ver Informe Final de la Evaluación de Medio Término PAJUST. Ídem, Página 56.

²⁴ Ver el Conjunto de Principios Actualizado para Protección y la Promoción de los Derechos Humanos mediante la lucha contra la impunidad (E/CN.4/2005/102/Add.1), B. Garantías de No-repetición, Principio 35.

²⁵ El Principio 36 (e): Reforma de las Instituciones Estatales, del *Conjunto de Principios Actualizados*, ídem, establece “la capacitación amplia y permanente en materia de derechos humanos” como una medida de no-repetición.

por COPREDEH e IIARS, se ha promovido la participación de las mujeres funcionarias con el propósito de incrementar su liderazgo e incidir en el proceso de transformación de los roles de género, tomando en cuenta que en la actualidad, la mayoría de los puestos claves en las instituciones del Estado son ocupados por hombres.

El Informe Final de la Evaluación de Medio Término identificó como una debilidad en este componente que los esfuerzos fueron aislados respecto a los otros pilares de la justicia de transición, *“por lo que sus efectos son muy limitados en el marco de la justicia de transición”*²⁶. Es necesario asegurar la integración e articulación de los procesos promovidos en el marco de la no-repetición con los demás procesos de justicia de transición. Por ejemplo, mediante la institucionalización de procesos de monitoreo y formación con funcionarios del Organismo Ejecutivo en los temas de derechos humanos y cultura de paz de una manera que los ubique dentro de – y los vincule con – los procesos más amplios de la justicia de transición.

Adicionalmente, se identifica la necesidad de ampliar los socios en este componente para incluir otros actores clave, tales como el Ministerio de Educación y el MICUDE. Mientras el tema del enfrentamiento armado interno está contemplado dentro del contenido de las Áreas de Formación Ciudadanía y Ciencias Sociales dentro del Currículo Nacional Base del MINEDUC, las capacidades de los maestros para enseñar los temas con la profundidad necesaria, así como utilizando metodologías adecuadas, son limitadas²⁷. Esta debilidad se responde a la falta de una pedagogía institucionalizada para el abordaje del EAI, y de los respectivos materiales y herramientas didácticas que permiten lograr una adecuada mediación de los contenidos tanto para los maestros como para los estudiantes. No existen procesos de capacitación a los maestros sobre el abordaje del EAI, ni mecanismos para institucionalizar la coordinación con organizaciones de la sociedad civil que tiene experiencia en la materia que podrían ser aliados claves. Aparte de ser una recomendación específica del Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico²⁸, la formación de los jóvenes sobre las causas, el desarrollo y las consecuencias del enfrentamiento armado interno fue recomendada por el Informe Final de Evaluación de PAJUST²⁹, así como de manera reiterada en las consultas que se llevó a cabo con más de 50 organizaciones de la sociedad civil y con representantes de víctimas de base (incluyendo 66 mujeres líderes de un total de 127) en cuatro departamentos (Huehuetenango, Quiché, Alta y Baja Verapaz) del país³⁰.

²⁶ Ver Informe Final de la Evaluación de Medio término PAJUST. Ídem, pagina36.

²⁷ Memoria de Consulta a organizaciones de sociedad civil vinculados a procesos formativos con el MINEDUC, 11 y 28 de julio 2014.

²⁸ Ver Informe CEH, ídem, Recomendación 36, pagina 69: Que en los currículos de educación primaria, secundaria y universitaria se incluya la enseñanza de las causas, el desarrollo y las consecuencias del enfrentamiento armado, así como del contenido de los Acuerdos de Paz, con la profundidad y el método correspondientes a cada nivel educativo.

²⁹ Ver Informe Final de la Evaluación de Medio Término PAJUST. Ídem, pagina 36.

³⁰ Ver Anexo: Sistematización de Proceso de Consultas PAJUST II

La obligación estatal de educar y sensibilizar a las nuevas generaciones sobre el enfrentamiento armado interno con el fin de promover una cultura de paz como medida de no-repetición, no debe limitarse a las aulas. Los espacios culturales como museos, pueden jugar un papel preponderante en la difusión de conocimientos y la promoción de una memoria colectiva sobre el pasado que aporte a la formación ciudadana y una verdadera cultura de paz, como salvaguardia contra la repetición. Estos espacios pueden también aportar a la transformación de roles de género, potenciando la participación de las mujeres como actrices de sus propias historias, muchas de las cuales permanecen en silencio, debido a estigmas culturales, particularmente a nivel comunitario.

La Política Pública de Resarcimiento (“Libro Azul”) en 2002, como una medida de dignificación, prevé la creación de museos con *“el propósito de preservar la memoria histórica y la dignificación de quienes sufrieron las consecuencias del enfrentamiento armado interno, se hace necesario contar con centros que condensen y reflejen lo sucedido en este período, donde gráficamente pueda conocerse y recordarse lo sucedido, como un legado histórico para nuevas generaciones”*³¹. Se recomendó la creación de museos en los departamentos, exposiciones itinerantes así como museos comunitarios, en coordinación con el Ministerio de Cultura y Deportes. Sin embargo dicha medida no ha sido implementada por el Estado, y por lo tanto existe un vacío cultural y educativo, lo cual, de llenarse, podrá tener una gran potencial de contribuir al conocimiento del pasado como una herramienta de reflexión como parte de la no-repetición. El establecimiento de estos museos, está alineado con el Plan Nacional de Desarrollo, K’atun: Nuestra Guatemala 2032, en donde se resalta que *“la cultura es un mecanismo que contribuye a la cohesión social y la revitalización del tejido social”* así como a la *“edificación de los propósitos comunes que conciben una convivencia pacífica, tolerante, solidaria y participativa, en el marco de un Estado Democrático”*³², e insta el Estado a establecer centros culturales en cada uno de los municipios que *“promueven la identidad nacional y fortalezcan el tejido social”*³³.

Garantizar la no-repetición también implica abordar y superar las causas profundas del enfrentamiento, entre ellos la falta de desarrollo. Tal como reconoce el *Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición*, Sr. Pablo de Greiff: *“las violaciones manifiestas de los derechos humanos y las violaciones graves del derecho internacional humanitario con frecuencia se ven alimentadas por, y dejan tras de sí, graves insuficiencias de desarrollo...y la promesa de garantizar la no repetición de las violaciones objeto del mandato puede convertirse en algo más que una promesa solo si se producen, de hecho, transformaciones sociales y*

³¹ Política Pública de Resarcimiento, Sección 5.5.4, página 24.

³² Plan Nacional de Desarrollo, K’atun Nuestra Guatemala 2032, página 177.

³³ Ídem, página 204.

estructurales³⁴. Por lo tanto, el empoderamiento de comunidades de víctimas para superar dichas graves insuficiencias del desarrollo es una parte clave de las garantías de no-repetición. Asimismo, en un reciente informe de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se recomienda mayor concientización sobre la importancia de abordar violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales como parte de la justicia de transición³⁵.

Los departamentos más afectados por el enfrentamiento armado interno según la CEH³⁶ - encabezado por el Quiché con el 45.52% del total de violaciones reportadas - también fueron identificados por la misma Comisión como los departamentos más excluidos, basados en índices de exclusión social del PNUD³⁷. Desde la perspectiva de los derechos humanos, dichos índices son indicadores del incumplimiento de parte del Estado con su obligación de garantizar los derechos económicos, sociales y culturales, y de abordar y resolver las causas estructurales que dieron vida al EAI. Las condiciones de exclusión social identificadas por la CEH en comunidades de víctimas en los departamentos más afectadas por el enfrentamiento armado interno, por lo general permanecen. Por ejemplo, según datos actualizados de PNUD³⁸, el Departamento de Quiché sigue teniendo el Índice de Desarrollo Humano – IDH - más bajo de todo el país – en la puesta 22 con un IDH de 0.47³⁹. Es claro que ni las iniciativas de justicia de transición ni los esfuerzos de desarrollo a la fecha han incidido para cambiar de manera significativa las condiciones materiales de vida de las víctimas - mayormente indígenas – en este departamento.

Las razones por la permanencia de condiciones de exclusión social en departamentos donde hay una alta concentración de víctimas del EAI, son muchas. Entre ellas, la tasa de analfabetismo, donde se ubica el 86.5% de hombres y el 73.3% de las mujeres del Departamento de Quiché⁴⁰; y un bajo nivel de participación de la ciudadanía⁴¹ - particularmente de jóvenes, mujeres e indígenas - en el Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural (SCDUR), siendo el mecanismo descentralizado con la potencial de involucrar a las comunidades en la definición de sus prioridades para el desarrollo⁴². Se

³⁴ Ver Informe Anual del Relator Especial sobre la promoción de verdad, justicia, reparación y garantías de no-repetición (A/HRC/21/46); párrafo 50, página 15.

³⁵ *Justicia de transición y Derechos Económicos, Sociales y Culturales*, Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Ginebra (2014), página 57.

³⁶ Ver Informe de la CEH "Guatemala, Memoria del Silencio", Conclusiones y Recomendaciones (1999), página 81.

³⁷ Informe de PNUD, Guatemala: "Los contrastes de desarrollo humano" (1998). El índice de exclusión está basado en mortalidad ante la edad de 40, analfabetismo en adultos, desnutrición en niños bajo 5 años, y accesibilidad a servicios básicos.

³⁸ PNUD, Informe Nacional de Desarrollo Humano: Sinopsis del Desarrollo Humano en Guatemala (2014), página 40.

³⁹ El Departamento con el IDH más alto es el Departamento de Guatemala, con 0.7, y el promedio nacional es 0.579.

⁴⁰ PNUD, Informe Nacional de Desarrollo Humano: Porcentaje de Analfabetismo entre jóvenes de 15 a 24 años de edad del año 2011(2011/2012), página 250

⁴¹ El ranking de la gestión municipal, SEGEPLAN (2012) evidencia que la participación ciudadana en los Consejos de Desarrollo es baja.

⁴² La Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural fue aprobado en mayo 2002 para "promover sistemáticamente la descentralización económico-administrativa como medio para motivar el desarrollo integral del país...propiciando una amplia participación de todos los pueblos y sectores de la población guatemalteca en la determinación y priorización de sus necesidades y las soluciones correspondientes".

identifica como una necesidad impulsar un mayor conocimiento y aprovechamiento de estos espacios – especialmente por parte de las mujeres - para canalizar propuestas de desarrollo que inciden en un mejoramiento de las condiciones de vida de las víctimas.

E. Componente Articulación

1. Articulación Temática

Un aspecto central de PAJUST ha sido la promoción de mecanismos de coordinación entre socios del Estado y de la sociedad civil, en búsqueda de alianzas estratégicas que redundan en mayores resultados para las víctimas. Dicha coordinación se logró durante la primera fase especialmente en el componente Justicia, en donde los resultados en los procesos penales y sentencias condenatorias fueron producidos por el esfuerzo conjunto con el Ministerio Público y la PDH⁴³, por un lado, y los querellantes adhesivos y otras organizaciones asesores en los casos paradigmáticos, por otro. Dicha coordinación fue prevista desde el diseño del Programa, alrededor de metas específicas (los casos paradigmáticos) lo cual contribuyó a su éxito. Durante la implementación del Programa se constituyeron otros espacios efectivos de coordinación temática, por ejemplo, el Espacio de Análisis de la Violencia de Género contra las Mujeres durante el EAI, el cual promueve el intercambio de información sobre avances en los casos bajo investigación y fortalece las estrategias para su abordaje⁴⁴; y se creó mesas regionales de coordinación entre el PNR, la FAFG y las organizaciones jurídico-sociales y psico-sociales en relación con el apoyo a las víctimas en procesos de exhumaciones e inhumaciones. El Informe Final de la Evaluación de Medio Término reconoce que *“las mesas temáticas, surgidas según las necesidades han resultado una buena práctica para favorecer la coordinación alrededor de un eje temático común”*⁴⁵.

A partir de estas experiencias exitosas, se identifica como necesario incorporar una articulación entre socios estatales y no-estatales alrededor de temas específicas en cada uno de los componentes Verdad, Justicia, Reparación y No-repetición desde el diseño de la segunda fase, definiendo con *“certeza los alcances de la articulación esperada entre Estado y sociedad civil y de la voluntad política del Estado”*, tal como identificado en el Informe Final de la Evaluación de Medio Término⁴⁶.

2. Articulación Departamental

⁴³ En ciertos casos de desaparición forzada en los cuales la PDH tiene el mandato de Averiguación Especial .

⁴⁴ Espacio conformado por el MP, fiscales a cargo de los casos, Querellantes Adhesivos, ONU Mujeres, OACNUDH, Comisión Internacional de Juristas e Impunity Watch.

⁴⁵ Ver Informe Final de la Evaluación de Medio Término PAJUST, Ídem, página 37.

⁴⁶ Ver Informe de la Evaluación de Medio Término PAJUST, Ídem Lecciones Aprendidas, inciso4, página 49.

En el diseño de la primera fase del Programa, no se incluyeron mecanismos específicos de articulación entre socios a nivel departamental. Sin embargo, debido a que muchos de los proyectos tendían a concentrar su implementación en las zonas más afectadas por el EAI, durante la implementación del PAJUST I se establecieron espacios de coordinación regional entre socios del Estado y de la sociedad civil en Huehuetenango, Quiché, y las Verapaces (Alta y Baja Verapaz). Dichos espacios contribuyeron a mejorar el intercambio de información e identificar posibilidades de coordinación en el terreno.

No obstante, se identificaron las siguientes debilidades: 1) Cuando no existe una focalización de esfuerzos al nivel comunitario, puede producirse dispersión y resultados a medias en cada comunidad; 2) Cuando un proyecto solo apunta a trabajar un aspecto de la justicia de transición, se debilita el enfoque integral que se debe priorizado tal como reconocen los estándares internacionales; 3) Cuando se apoyan múltiples proyectos de múltiples organizaciones en una misma región, el riesgo es la duplicidad de esfuerzos o competencia para trabajar con ciertos grupos; 4) Cuando no se establecen los mecanismos de coordinación con el Estado desde el diseño de los proyectos, no hay certeza que dicha coordinación puede producirse exitosamente durante la implementación.

Por lo tanto, tal como identifica el Informe Final de la Evaluación de Medio Término, se requiere desde el diseño, *"mayor articulación a nivel local para potenciar las acciones con la integración de los socios"*, recomendando además *"una mayor y más estrecha coordinación entre los diferentes socios de sociedad civil trabajando en una misma localidad, de modo que se evitaren competencias o duplicidades"*⁴⁷.

3. Articulación entre Componentes

Además de la articulación entre socios estatales y no-estatales al nivel temático y regional, existe otro nivel de articulación que se ha producido durante la primera fase de PAJUST: articulación entre socios *entre* los componentes. Esta articulación se definió en las Metas Articuladas, las cuales se monitorearon trimestralmente en las reuniones de la Junta de Coordinación Ejecutiva. Sin embargo se ha identificado la necesidad de focalizar la coordinación de las metas articuladas en un nivel temático más específico para garantizar un seguimiento más concreto a los avances y articulación entre componentes.

Tal como identificó el Informe Final de la Evaluación de Medio Término, la articulación entre ciertos componentes fue más fuerte que en otros. Por ejemplo, se logró una excelente coordinación entre algunos socios del componente Verdad (AHPN y el AGCA) y los socios de Justicia (el MP y la PDH),

⁴⁷ Ver Informe Final de la Evaluación de Medio Término PAJUST, Ídem, página 45.

así como entre los socios de Reparación (FAFG) y los socios de Verdad y Justicia. Es necesario continuar y fortalecer dichas coordinaciones.

Sin embargo, la coordinación entre los socios de No-Repetición (COPREDEH, SEPAZ y IIARS, por ejemplo) con los socios de los demás componentes fue débil⁴⁸. Por lo tanto, se ha identificado la necesidad de asegurar en el diseño de las estrategias a apoyar en el marco de la No-Repetición, su estrecha vinculación con los demás componentes, permitiendo una mayor articulación de esfuerzos en favor de la integralidad. La creación de estos espacios de coordinación más específicos tiene como objetivo mantener la metodología de la articulación integral y a la vez garantizar una mayor uniformidad en los avances de la articulación entre socios.

4. Articulación entre Cooperantes

Finalmente, se ha identificado la necesidad de contar con un espacio de coordinación programática, con otros cooperantes en materia de justicia de transición, para identificar sinergias y evitar duplicaciones. .

Dicho espacio será complementario al Grupo de Intercambio sobre Justicia de Transición, convocado desde la Oficina del Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), ya que dicho Grupo funciona como un espacio de análisis en general sobre temas de justicia de transición con miembros de la comunidad internacional – principalmente Embajadas - con interés en los temas. En cambio, el espacio de coordinación programática que se establecerá desde PAJUST, se limitará a aquellos cooperantes que apoyan con fondos y proyectos, la justicia de transición y será un espacio para intercambiar criterios políticos y programáticos para potenciar sinergias en la cooperación en favor de los resultados de la justicia de transición a largo plazo.

II. ESTRATEGIA

Para continuar el proceso de consolidación de la justicia de transición en Guatemala, en la segunda fase del PAJUST, las necesidades identificadas en la sección Análisis Situacional en relación con la Verdad, la Justicia, la Reparación y la No-repetición, así como la Articulación, serán abordadas mediante la implementación del presente Proyecto DIM en un conjunto con los tres proyectos siguientes a ser implementados en la modalidad NIM.

⁴⁸ Ver Informe Final de la Evaluación de Medio Término PAJUST, paginas 45-47.

- 1) “Institucionalización del Archivo Histórico de la Policía Nacional - AHPN - para el impulso a la justicia de transición” a ser implementado por el Ministerio de Cultura y Deportes (AGCA-AHPN), en la modalidad NIM Estado.
- 2) “PAJUST II – Búsqueda e identificación de las víctimas del enfrentamiento armado interno para el impulso de la justicia de transición” a ser implementado por la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), en la modalidad NIM ONG.
- 3) “Difusión, educación y dialogo social en promoción de la memoria y el impulso de la justicia de transición” a ser implementado por el Instituto Internacional de Aprendizaje para la Reconciliación Social (IIARS), en la modalidad NIM OMG.

Estos 4 proyectos, que conforman el PAJUST II, implementarán las siguientes estrategias generales:

1) Enfoque de Derechos Humanos y Alianzas

Basado en los lineamientos de Naciones Unidas sobre el enfoque de la cooperación para el desarrollo basado en los derechos humanos⁴⁹, el Programa promoverá la realización de los derechos humanos – a la verdad, la justicia, la reparación y la no-repetición -, se guiará por los estándares y principios de derechos humanos en todas las fases de programación, y contribuirá al desarrollo de las capacidades de los “portadores de obligaciones” para cumplir con sus obligaciones, y a las capacidades de los “titulares de derechos” para reclamar sus derechos.

En su segunda fase, PAJUST ampliará su apoyo a otras instituciones del Estado relevantes, para reforzar su papel como portador de obligaciones, y continuará promoviendo el empoderamiento y participación de las víctimas del EAI como titulares de derechos.

Se priorizará la consolidación y creación de *alianzas estratégicas* entre las instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil en beneficio del empoderamiento de las víctimas y la realización de sus derechos.

2) Focalización en grupos destinatarios y departamentos priorizados

⁴⁹ Declaración de Entendimiento Común entre las Agencias de las Naciones Unidas sobre el enfoque de la cooperación para el desarrollo basado en los derechos humanos (2003)

El grupo destinatario del PAJUST en su segunda fase son las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante el EAI. En particular, se priorizará la atención a las víctimas en comunidades en los departamentos más afectados según la CEH, siendo Quiché (46%), Huehuetenango (16%), Alta Verapaz (9%), Chimaltenango (7%) y Baja Verapaz (5%)⁵⁰. Las poblaciones – incluyendo las comunidades de víctimas – en estos departamentos rurales viven en pobreza y extrema pobreza, y sufren inequidad y exclusión⁵¹.

3) Enfoque multidimensional y escalabilidad

En reconocimiento que las víctimas del EAI enfrentan diversos desafíos – incluyendo pero no limitado a sus capacidades para el ejercicio de sus derechos en el marco de la justicia de transición - en su segunda fase PAJUST promoverá la vinculación de procesos de justicia de transición con otros procesos del desarrollo humano. De esta forma se logrará empoderar a las víctimas no únicamente para el ejercicio de sus derechos a la verdad, justicia, reparación y no-repetición, sino más ampliamente para fomentar su resiliencia y participación ciudadana en el proceso de desarrollo humano.

Se implementará un Proyecto Piloto en el área – los municipios de Nebaj, Chajul y Cotzal - del Quiché, debido a que, tal como se ha señalado, dicho departamento fue el más afectado por el EAI, con el 46% del total de graves violaciones a los derechos y hechos de violencia, y que además sigue teniendo el IDH más bajo de todo el país. Dicho proyecto se implementará como parte de las estrategias de no-repetición (ver detalles más adelante), y en coordinación con instituciones claves con competencia de brindar respuesta a las demandas de desarrollo de las comunidades organizadas en el marco de los Consejos de Desarrollo que serán apoyados a través del Programa Conjunto de Desarrollo Rural Ixil a ser implementado por PNUD, FAO y OPS/OMS en las mismas comunidades y municipios.

Tras la implementación y una rigurosa evaluación de los resultados del Proyecto Piloto en el área Ixil, se considerará replicar el modelo en una selección de municipios en los otros departamentos mayormente afectados por el EAI. De esta forma, se espera que los resultados logrados para las comunidades de víctimas en el área Ixil puedan ser ampliados a otras regiones geográficas, extendiendo significativamente el impacto del Programa.

4) Sostenibilidad

⁵⁰ Según al CEH, los departamentos en donde se cometieron la mayoría de las graves violaciones a los derechos humanos y hechos de violencia, fueron Quiché (46%), Huehuetenango (16%), Alta Verapaz (9%), Chimaltenango (7%) y Baja Verapaz (5%). Informe CEH Guatemala: Memoria del Silencio (1999) Anexo III, p.209.

⁵¹ Los departamentos del Quiché, Huehuetenango y Alta Verapaz se ubican entre los seis departamentos con un Índice de Desarrollo Humano calificado como "Bajo" según el Informe Nacional de Desarrollo Humano de PNUD 2011, con Índices de Desarrollo Humano (IDH) de 0.47, 0.5, y 0.51 respectivamente, contra el promedio nacional de 0.579.

La importancia de construir capacidades de los actores nacionales – Estatales y de la sociedad civil – de llevar a cabo y expandir las iniciativas de justicia de transición sin dependencia de los recursos de la cooperación internacional, genera la necesidad de priorizar, desde el diseño de PAJUST II estrategias de sostenibilidad en diferentes ámbitos. Sobre la base de distintas lecciones aprendidas se considera el elemento de la sostenibilidad, no únicamente desde el punto de vista financiero, sino que también un tema relacionado con aspectos institucionales, políticos y sociales.

En este sentido se promoverá la institucionalización de iniciativas con los socios Estatales, además de estrategias de diversificación de fuentes de financiamiento para lograr sostenibilidad en los socios altamente dependientes en el apoyo financiero de PAJUST.

Por otro lado, se considera la importancia de promover la sostenibilidad de los resultados en justicia de transición también desde la perspectiva social: la promoción de un amplio debate sobre los temas, redundará en mayor concientización de la opinión pública sobre la importancia de los procesos y por ende sobre el apoyo a los mismos.

5) Voz y participación de los grupos destinatarios

La importancia de la participación de las personas en su desarrollo es un principio clave de derechos humanos y del *enfoque de derechos humanos* en la programación del desarrollo⁵².

Adicionalmente, la importancia de la participación de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en el diseño e implementación de *iniciativas de justicia de transición* ha sido reconocida e reiterada por Naciones Unidas como un elemento clave para asegurar su éxito⁵³.

En la fase de diseño, las prioridades temáticas para la segunda fase de PAJUST han sido identificadas a partir de procesos de consulta en los cuales las víctimas y sus organizaciones, tanto al nivel de la capital como de base, han participado plenamente. Mediante giras de consulta en cuatro de los departamentos más afectados por el EAI (Quiché, Huehuetenango, Alta y Baja Verapaz), se reunió con más de 100 víctimas y líderes de víctimas al nivel comunitario. En adición se reunió con más de 50 organizaciones de la sociedad civil, en su mayoría organizaciones de víctimas del EAI.

⁵² Ver, por ejemplo la *Declaración de Entendimiento Común entre las Agencias de las Naciones Unidas sobre el enfoque de la cooperación para el desarrollo basado en los derechos humanos* (2003).

⁵³ Por ejemplo, ver El Abordaje de Naciones Unidas a la Justicia de Transición: Nota de Guía del Secretario-General, 10 marzo 2010; Informe del Relator Especial sobre la Promoción de la verdad, justicia, reparación y las garantías de no-repetición, Pablo de Greiff, 9 agosto 2012 (A/HRC/21/46).

En la fase de implementación, se asegurará la voz y participación de las víctimas mediante su involucramiento en las mesas de articulación temática y departamental, en los espacios de participación del Sistema Nacional de Consejos de Desarrollo (mediante el Proyecto Piloto en coordinación con el Programa Conjunto de Desarrollo Rural Ixil), así como en la Junta de Coordinación Ejecutiva del Programa.

Específicamente en la región Ixil – y se espera posteriormente en otros departamentos - con la implementación del Proyecto Piloto en las comunidades a ser seleccionadas, todas las acciones se orientarán al empoderamiento de las víctimas para el ejercicio de sus derechos a la justicia de transición y al desarrollo humano, con lo cual la participación de las mismas en el curso del proyecto será permanente.

6) Integralidad y articulación de la justicia de transición

Desde el inicio de la primera fase de PAJUST en 2010, la importancia del abordaje *integral* de la justicia de transición que el Programa promueve - de modo que los elementos de la búsqueda de la verdad, las iniciativas de justicia, la reparación y las garantías de no repetición se complementen y refuercen - ha sido reiterada y respaldada por las Naciones Unidas, incluyendo por el Secretario General⁵⁴ y por el Relator Especial por la promoción de la verdad, justicia, reparación y garantías de no-repetición, Pablo de Greiff. El Relator Especial, ha reiterado enfáticamente la importancia del enfoque global, identificando los mecanismos de verdad, justicia, reparación y no-repetición como *“áreas de acción interrelacionadas que pueden reforzarse mutuamente en el proceso de subsanar las secuelas del abuso y la vulneración masiva de los derechos humanos”*⁵⁵.

Adicionalmente, apunta que: *“La experiencia internacional, así como los estudios, sugieren que la aplicación integra de los cuatros componentes del mandato ofrece a la diversas partes interesadas, principalmente las víctimas, razones más poderosas para comprender las medidas como intentos de hacer justicia tras las violaciones cometidas que su aplicación descoordinada o fragmentada”*⁵⁶.

En sus informes de 2013 y 2014 , el Relator explicó, que: *“La verdad no puede ser un sustituto por la justicia, reparación o garantías de no-repetición, por sí solas o colectivamente, y recuerda que existen obligaciones nacionales e internacionales sobre cada uno, razones morales y políticas para implementarlas así como evidencia empírica que funcionan mejor, como medidas de justicia, cuando*

⁵⁴ Ver Guidance Note of the Secretary General: United Nations Approach to Transitional Justice (Inter-office Memorandum, 10 March 2010); Guiding Principle 8, page 2.

⁵⁵ Informe Anual 2012 del Relator Especial sobre la promoción de verdad, justicia, reparación y garantías de no-repetición (A/HRC/21/46), p. 7 párrafo 21.

⁵⁶ Ídem, pagina 8, párrafo 22.

*son diseñados e implementados en una manera integral en lugar de aislados uno del otro*⁵⁷, y además que *“no hay “atajos” a la reconciliación social: la reconciliación al nivel de una sociedad solo puede ser alcanzada de una manera sostenible mediante medidas de verdad, justicia, reparación y garantías de no-repetición, entre otras políticas de reforma*⁵⁸.

PAJUST seguirá implementando un enfoque integral a la justicia de transición, con una estructura de programa que refleja 4 componentes – Verdad, Justicia, Reparación y No-repetición- así como un quinto componente, Articulación, siendo este último la clave para asegurar que las distintas iniciativas se complementen y mutuamente se refuercen.

Se promoverá la articulación temática, geográfica, entre *componentes* y entre *cooperantes*. La facilitación de estos espacios de articulación será a cargo del Equipo de Coordinación de PAJUST, dentro del quinto componente del Programa, tal como se detalle más adelante.

7) Enfoque de Genero

PAJUST reconoce que las mujeres guatemaltecas experimentaron el enfrentamiento armado interno en una forma diferente a los hombres y que las graves violaciones a los derechos humanos cometidas tuvieron un impacto especial en sus vidas.

El Tomo III del Informe de la CEH hace referencia que las mujeres fueron víctimas de todas las formas de violaciones a sus derechos humanos, pero además sufrieron formas *específicas* de violencia de género; la CEH registró 9,411 mujeres víctimas, del cual el 33% fueron víctimas de ejecuciones arbitrarias (individuales o en masacres), el 19% corresponde a torturas, el 18% a privación de libertad, el 14% a violación sexual, el 6% a desaparición forzada, el 4% a muertes por desplazamientos y otro 6% a otras violaciones⁵⁹. La violencia contra las mujeres durante el enfrentamiento armado interno se expresó de manera particular en la violación y otras formas de violencia sexual⁶⁰. Tal como resume Impunity Watch: *“A pesar que el informe de la CEH establece que los hombres formaron la mayoría de las víctimas directas de la mayoría de las violaciones a los derechos humanos, concluye que las mujeres forman por mucho (99%) la mayoría de las víctimas de violencia sexual. La violencia sexual fue cometida de manera sistemática en las masacres: las mujeres y los niños frecuentemente fueron separados de los hombres, después de lo cual fueron violadas mientras que los hombres sufrieron otras formas de tortura; luego todos fueron asesinados. Aparte de la violación, las mujeres también*

⁵⁷ Informe Anual 2013 del Relator Especial sobre la promoción de verdad, justicia, reparación y garantías de no-repetición (A/HRC/24/42), p. 7 párrafo 26.

⁵⁸ Informe Anual 2014 del Relator Especial sobre la promoción de verdad, justicia, reparación y garantías de no-repetición (A/HRC/27/56), p. 5 párrafo 19.

⁵⁹ CEH, Tomo III, Guatemala Memorias del Silencio, Violencia de Género (1999), página 22.

*fueron víctimas de embarazo forzado, esclavitud sexual, unión forzada con soldados o paramilitares, así como mutilaciones. Se usó la violencia sexual como una manera de sembrar terror, obtener información, pero también para prevenir el nacimiento de futuros 'guerrilleros'".*⁶¹

Las mujeres víctimas tienen demandas y necesidades específicas que deben ser reflejadas en todos los procesos de justicia de transición y su participación efectiva en dichos procesos debe ser garantizada. Los procesos de justicia de transición apoyados por PAJUST tienen la potencial – y la responsabilidad – de contribuir al reconocimiento, la recuperación y el empoderamiento de las mujeres víctimas para ejercer sus derechos plenamente y promover a la transformación de roles de género.

Para lograr este fin, para la segunda fase de PAJUST, se ha asegurado el enfoque de género de la siguiente manera:

- 1) Procesos participativos para el diseño del PAJUST II que tomen en consideración las diferentes necesidades y oportunidades de los hombres y de las mujeres. En su proceso de diseño, PAJUST ha realizado consultas en 4 departamentos, más la capital, con más de 50 organizaciones, incluyendo organizaciones de mujeres y Comités de Víctimas sobre prioridades de hombres y mujeres en relación con la verdad, la justicia, la reparación y la no-repetición. A nivel de los departamentos de cobertura del Programa (Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz y Baja Verapaz), se realizaron dos rondas de consulta con un total de 127 participantes, de los 66 fueron mujeres y 61 hombres. Adicionalmente, en la ciudad capital se llevó a cabo un *Intercambio y Consulta para el Estrategia de Género* en la segunda fase de PAJUST. La incorporación de acciones específicas – con metas e indicadores - en los proyectos tanto del Estado como de la sociedad civil en las modalidades en favor del acceso de las mujeres víctimas a sus derechos en cada componente de verdad, justicia, reparación y no-repetición. Dichas acciones incluirán una atención especial a las necesidades de las mujeres víctimas de violencia sexual.
- 2) La incorporación de mecanismos que promuevan un aumento de la participación de las mujeres víctimas en todas las actividades, tanto del Equipo de PAJUST como de los socios.
- 3) El empoderamiento de las lideresas de los Comités de Víctimas al nivel comunitario en el Proyecto Piloto que se implementará en el área Ixil en coordinación con el Programa Conjunto de Desarrollo Rural Ixil para asegurar su voz y participación en la toma de decisiones, lo cual contribuirá a la transformación de roles de género a nivel local.

⁶¹ Impunity Watch, *Creando un espacio para las voces de todas las víctimas: hacia procesos de verdad, justicia, reparación y no-repetición con sensibilidad de género en Guatemala*, (2012).

- 4) Capacitaciones anuales a todos los socios en la teoría y práctica de la incorporación del enfoque de género en procesos de justicia de transición.
- 5) Se coordinará estrechamente con ONU Mujeres para el desarrollo del enfoque de género en PAJUST II, asegurando alineamiento con los procesos orientados a la implementación de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre mujeres, paz y seguridad, particularmente la 1325 y 1820.

Enfoque en las Víctimas Indígenas

Según la CEH, los pueblos mayas sufrieron el 83% de las violaciones a los derechos humanos cometidos durante el EAI, y por ello, el grupo destinatario del Programa es mayormente indígena.

El racismo fue identificado por la CEH en su informe de 1999 como una de las causas históricas del enfrentamiento armado interno⁶², y se incluyó en sus recomendaciones para la promoción de una cultura de respeto mutuo, medidas para *garantizar los derechos de los pueblos indígenas, el respeto para pluralidad cultural y la promoción de relaciones interculturales*.

Se diseñará medidas en cada componente de acuerdo a sus perspectivas, y se visualizará la manera en que las medidas a implementarse incorporan y promueven los derechos de los pueblos indígenas reconocidos en la *Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas*⁶³. Los procesos de justicia de transición apoyados por PAJUST tienen la potencial – y la responsabilidad – de contribuir al reconocimiento, la recuperación y el empoderamiento de las víctimas indígenas del enfrentamiento armado interno para el ejercicio pleno de sus derechos. Para lograr este fin, para la segunda fase de PAJUST, se incorporará un enfoque en las víctimas indígenas por medio de las siguientes acciones:

- 1) Asegurando la participación de organizaciones de víctimas indígenas en el proceso de diseño del PAJUST II, para asegurar que las estrategias respondan a sus necesidades y prioridades. En su proceso de diseño, PAJUST ha realizado consultas en 4 departamentos incluyendo 26 organizaciones de víctimas indígenas, sobre sus prioridades en relación con la verdad, la justicia, la reparación y la no-repetición, y mecanismos para asegurar la pertinencia cultural de todas las acciones apoyadas, las cuales han sido tomadas en cuenta en el presente proyecto.

⁶² Ver Informe de la CEH, "Guatemala, Memoria del Silencio", Conclusiones y Recomendaciones (1999), página 19.

⁶³ Resolución aprobada por la Asamblea General 61/295.

- 2) Se diseñará medidas en cada componente que respondan a las prioridades de las víctimas indígenas hombres y mujeres, y se visualizará la manera en que procesos de verdad, justicia, reparación y no-repetición pueden incorporar y promover los derechos de los pueblos indígenas reconocidos en el Convenio 169 de la OIT y de la *Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas*⁶⁴.
- 3) Se incorporará mecanismos que promuevan la participación de las víctimas indígenas en todas las actividades, tanto del Equipo de PAJUST como de los socios, brindando el servicio de traductores donde sea necesario.
- 4) Específicamente en la implementación del Proyecto Piloto en el área Ixil en coordinación con el Programa Conjunto de Desarrollo Rural Ixil, todas las actividades se orientarán al empoderamiento de comunidades ixiles en el ejercicio de sus derechos ampliamente.
- 4) Se focalizará territorialmente la articulación de acciones para comunidades de víctimas indígenas en los departamentos más afectados por el enfrentamiento, incluyendo al menos 5 comunidades lingüísticas (Q'anjob'al, Mam, Ixil, Kakchiquel, Q'eqchi y Ahí).
- 5) Se coordinará estrechamente con el Programa Maya (PNUD-OACNUDH-UNICEF), para buscar sinergias en nuestras respectivas estrategias, especialmente al nivel territorial donde nuestros socios coinciden.

⁶⁴ Resolución aprobada por la Asamblea General 61/295.

Estrategias por Componente

Las estrategias específicas a implementar bajo el presente Proyecto son las siguientes:

A. Componente Verdad

1. Búsqueda de desaparecidos del EAI

En relación con el esclarecimiento del paradero de personas desaparecidas y durante el EAI, para superar la ausencia de una entidad estatal dedicada a la búsqueda de personas desaparecidas, se apoyarán organizaciones de la sociedad civil para crear alianzas en promoción de la sensibilización amplia e incidencia política para la aprobación de la iniciativa de ley 3590, para la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda de Víctimas de Desaparición Forzada y Otras formas de Desaparición, lo cual cuenta con dos dictámenes favorables⁶⁵ y pasó en primera lectura en mayo del 2014. La inclusión de esta iniciativa de ley en la agenda de la Mesa de Seguridad y Justicia del Congreso en 2014, y la existencia de un espacio de coordinación entre actores estatales y no-estatales, incluyendo organizaciones de víctimas, promovido por PAJUST, representan oportunidades para fortalecer la incidencia para la aprobación de esta ley.

En adición, se apoyará a las organizaciones de la sociedad civil para impulsar procesos de búsqueda de víctimas, de forma coordinada con la FAFG, y priorizando la participación y empoderamiento de los familiares, y especialmente las mujeres, en todo momento.

2. Difusión y diálogo sobre la memoria histórica

Se promoverá, de forma transversal en todos los proyectos de la sociedad civil, la implementación de actividades de comunicación y difusión para dar a conocer su trabajo a favor de la justicia de transición. Dichas actividades se articularán con la Plataforma Virtual de la Memoria (PVM) a ser establecida por IIARS y el Memorial para la Concordia mediante el Proyecto "PAJUST II - PAJUST II - Difusión, educación y diálogo social en promoción de la memoria y la justicia de transición".

⁶⁵ La iniciativa del ley 3590 recibió un dictamen favorable de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso el 27 de agosto 2007, y de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales el 22 de marzo 2011.

B. Componente Justicia

Para promover mayor acceso al derecho a la justicia para víctimas del EAI, se promoverán diversas estrategias para fortalecer las instituciones del sector justicia a cargo de la investigación y judicialización de los casos, así como las organizaciones de la sociedad civil que impulsan casos priorizados en calidad de querellante adhesivo o entidad asesor.

1. Ministerio Público

Mediante asistencia técnica, se fortalecerá la Unidad de Análisis de la Fiscalía de Sección de Derechos Humanos ("FSDH") para realizar el análisis de fenómenos criminales vinculados a los casos de graves violaciones a los derechos humanos bajo la responsabilidad de la Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno. Se adaptará la metodología del análisis criminal al contexto específico de la FSDH, incluyendo formación especializada y dotación de herramientas técnicas.

Se dará continuidad a la asistencia técnica en relación con el impulso de los casos paradigmáticos actualmente priorizados y avanzados durante la primera fase de PAJUST, incluyendo casos de violación sexual cometidas contra las mujeres, y se seguirá en la implementación e institucionalización de protocolos y manuales para fortalecer la investigación criminal de los casos del EAI. Adicionalmente, en relación con el resto del universo de casos bajo la competencia de la UCEEAI, se desarrollará una estrategia de investigación y persecución penal utilizando las herramientas desarrolladas durante la primera fase de PAJUST⁶⁶, incorporando el análisis de fenómenos criminales, e incluyendo una clara priorización y conexión temática o geográfica de los casos. En cada uno de los casos priorizados en el marco de esta Estrategia, se fortalecerán los planes de investigación, y se realizarán peritajes especializados para el mejoramiento de la hipótesis criminal.

En el marco del fortalecimiento de la investigación y persecución penal, se dedicará una especial atención a fortalecer las capacidades de los fiscales en la promoción de un enfoque de reparación digna, adecuada al contexto del país, en el desarrollo de las imputaciones, para fomentar que las eventuales sentencias incluyan dicho enfoque a manera de fortalecer el vínculo con la reparación integral para las víctimas.

⁶⁶ Por ejemplo, la Instrucción General para la Investigación y Persecución Penal de las Graves Violaciones a los Derechos Humanos Cometidas durante el Conflicto Armado Interno (02-2011); Instrucción General 02-2012, y el Manual de Investigación de Casos de Violencia Sexual ocurridas durante el conflicto armado interno; Criterios para el abordaje de la investigación, la persecución y la acción penal que permitan la acumulación o la separación de casos de acuerdo a las particularidades propios de los hechos que se sujetarán a conocimiento de los órganos jurisdiccionales (2013); Bases de datos sobre casos (2012 y 2013); Proyecto de digitalización de expedientes de Fiscalías Distritales y Municipales (2014).

Tanto en el análisis de fenómenos criminales, como en el desarrollo de la estrategia de investigación y persecución penal y la priorización de los casos, se incluirá una atención prioritaria para los casos de violencia sexual cometidas contra las mujeres durante el EAI, se visibilizará el enfoque en las víctimas indígenas, y se priorizará las investigaciones de casos de los departamentos más afectados durante el enfrentamiento (Quiché, Huehuetenango, Chimaltenango, Alta y Baja Verapaz).

En adición, se elaborarán protocolos actualizados de atención psicosocial a las víctimas para aplicación durante todas las fases del proceso penal, y se promoverá el acceso a traductores e intérpretes legales, para garantizar el acceso a la justicia con pertinencia lingüística y cultural. Dichos protocolos incorporarán un enfoque de género para asegurar que las dificultades que en su mayoría afectan a las mujeres, se logran disminuir.

Finalmente, se asegurará la implementación y la institucionalización de procesos formativos, en coordinación con el UNICAP, para el mejoramiento de las capacidades de los fiscales. De manera complementaria, se mejorará el sistema de evaluación de desempeño de los fiscales de la UNICAP para medir el impacto de los procesos de fortalecimiento institucional en su rendimiento.

2. OJ

Para complementar el trabajo de fortalecimiento en la investigación y persecución penal, se fortalecerá los conocimientos de los jueces del Organismo Judicial mediante la creación de una malla curricular para la Escuela de Estudios Judiciales, sobre los estándares y principios internacionales para el juzgamiento de graves violaciones a los derechos humanos y delitos internacionales, incluyendo la violencia sexual y otras formas de violencia sufrida por las mujeres. Dicha estrategia se implementará en alianza estratégica con la OACNUDH, que en la primera fase coordinó con PAJUST un programa de formación para jueces sobre la aplicación de estándares internacionales en las resoluciones judiciales de los casos del EAI.

3. Sociedad civil

Las estrategias arriba detalladas de fortalecimiento institucional de las instituciones del Estado, se complementarán con el apoyo a los querellantes adhesivos o entidades asesoras en una selección de casos del EAI que han sido priorizados por el MP. Igualmente se apoyará iniciativas de la sociedad civil orientadas al monitoreo y fiscalización de las instituciones del sector justicia con respecto a los casos del EAI.

C. Componente Reparación

1. PNR

Para mejorar el acceso de las víctimas al resarcimiento integral del PNR, se fortalecerá la institucionalidad del Programa mediante una actualización de la Política Pública de Resarcimiento incluyendo el enfoque de género y la creación de un *Registro Nacional de Víctimas*, sobre las cuales existen propuestas realizadas durante la primera fase de PAJUST. A través de la asistencia técnica y el acceso a herramientas tecnológicas (software), se mejorarán los sistemas de planificación de la implementación de las medidas de reparación de forma integral, a partir de un análisis del universo de víctimas, un ejercicio de priorización de comunidades y la aplicación de nuevas metodologías que contemplan las 5 medidas y una alta participación de las víctimas – especialmente las mujeres víctimas - en la definición de prioridades. Se promoverá el fortalecimiento y la implementación del Plan de Atención Integral a mujeres víctimas de violencia de género y violencia sexual durante el EAI, elaborado durante la primera fase de PAJUST.

Se continuará el apoyo a las mesas regionales de articulación entre el PNR, la FAFG y las organizaciones jurídico-sociales y psico-sociales que apoyan a las víctimas en procesos de exhumaciones e inhumaciones, con la perspectiva de ampliar las coordinaciones a incluir *otras* medidas de resarcimiento en beneficio de la integralidad de la respuesta a las víctimas en estos procesos.

Finalmente, se apoyará el PNR para el establecimiento y funcionamiento del Consejo Consultivo de Organizaciones de Víctimas con participación de las mujeres, y para la facilitación desde las sedes del PNR de mesas de coordinación con los Comités de Víctimas y sus representantes, especialmente en los departamentos más afectados por el EAI. En estas mesas se dará especial atención a las demandas priorizadas por la mujeres, así como a otras acciones que han venido desarrollando, a partir de la reintegración de la Coordinadora de Mujeres del Movimiento Nacional de Víctimas.

2. RENAP

El trabajo de fortalecimiento del PNR, se complementará con estrategias a implementar con el RENAP con el fin de mejorar el acceso de las víctimas del EAI a la documentación personal que necesitan para ejercer sus derechos. Se realizará un Diagnóstico de las necesidades y dificultades que experimentan las víctimas resaltando las de las mujeres y familiares en la obtención de sus documentos, para proponer rutas de solución que podría incluir la aprobación de reglamentación temporal de documentación, reformas políticas o institucionales en el RENAP, la creación de unidades especiales de atención a las víctimas, procesos de sensibilización de funcionarios, entre otras medidas.

Adicionalmente, se establecerá una mesa de trabajo entre RENAP, el AGCA-AHP, el PNR, el MP, la FAFG y organizaciones de la sociedad civil para promover coordinación continua para la búsqueda de soluciones a la problemática de la documentación personal de las víctimas.

3. Sociedad civil

Las estrategias arriba detalladas de fortalecimiento institucional de las instituciones del Estado, se complementarán con las estrategias a ser apoyados mediante la sociedad civil. En particular, mediante la implementación del proyecto "PAJUST II - Investigaciones, identificaciones e inhumaciones de las víctimas del enfrentamiento armado interno para el impulso de la justicia de transición" por la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), en la modalidad NIM ONG, así como mediante el apoyo a organizaciones de la sociedad civil que brindan apoyo jurídico y psicosocial a las víctimas en los procesos de exhumaciones e inhumaciones, y promoviendo la aplicación de los *Principios y Normas Mínimas sobre Trabajo Psico-social en Procesos de Búsqueda e Investigación forense para casos de Desapariciones Forzadas, Ejecuciones Arbitrarias o Extrajudiciales*.

D. Componente No-Repetición

1. MINEDUC

Con el Ministerio de Educación, con base en la Recomendación # 36 de la CEH, sobre una *Propuesta para la Reforma Educativa* se brindará asistencia técnica para desarrollar, en el marco del Currículo Nacional Base y la Reforma Educativa, una *Pedagogía de Memoria Histórica y Cultura de Paz* dentro de las Áreas de Formación Ciudadanía y las Ciencias Sociales. Se desarrollará asimismo materiales y herramientas para la mediación pedagógica de los contenidos para cada nivel, y se implementará cursos de formación con los maestros – priorizando los maestros en los departamentos más afectados por el enfrentamiento y en la ciudad capital - para el uso de la pedagogía y los materiales desarrolladas.

La *Pedagogía de la Memoria Histórica y Cultura de Paz* será elaborada en estrecha coordinación con la Mesa de Educación para la Paz, la Memoria y los Derechos Humanos la cual aglutina una amplia gama de organizaciones de la sociedad civil con experticia en la materia. El acompañamiento por parte de esta Mesa – bajo la Secretaría Técnica de IIARS⁶⁷ - al proceso de elaboración, validación e implementación de Pedagogía, además de asegurar un aprovechamiento de los conocimientos técnicos y experiencia práctica de los integrantes para nutrir la calidad del producto, aportará a su sostenibilidad.

⁶⁷ Instituto Internacional de Aprendizaje para la Reconciliación Social – IIARS - implementará el Proyecto "Difusión, educación y diálogo social en promoción de la memoria y la justicia de transición" durante la segunda fase del PAJUST en la modalidad NIM ONG.

Esta estrategia se enmarca en las políticas del “Bienestar para la Gente” del Plan Nacional de Desarrollo, K’atun Nuestra Guatemala 2023, y aportará directamente al logro del Resultado 1.4 sobre la incorporación en el sistema educativo de la cultura de paz⁶⁸.

2. MICUDE

Con el Ministerio de Cultura y Deportes, en alianza con el Programa Nacional de Resarcimiento, gobiernos locales y organizaciones de víctimas y de la sociedad civil, se promoverá la creación de una red de Museos Regionales de la Memoria Historica y la Cultura de Paz, en los departamentos más afectados por el EAI. Dichos museos constituirán espacios públicos para recordar y dignificar la memoria de las víctimas, incluyendo las memorias específicas de las mujeres víctimas, enseñar sobre sus causas así como las consecuencias para el tejido social de la sociedad guatemalteca. Serán asimismo espacios de reflexión, participación y construcción – especialmente de las y los jóvenes - de propuestas y rutas de reparación y transformación para asegurar que los hechos trágicos del enfrentamiento nunca vuelvan a repetirse. De esta forma, constituirán una herramienta clave para los maestros del MINEDUC, en la implementación de la Pedagogía de la Memoria Historica y Cultura de Paz.

El establecimiento de estos museos, está alineado con el Plan Nacional de Desarrollo, Katun: Nuestra Guatemala 2032, en donde se resalta que *“la cultura es un mecanismo que contribuye a la cohesión social y la revitalización del tejido social”* así como a la *“edificación de los propósitos comunes que conciben una convivencia pacífica, tolerante, solidaria y participativa, en el marco de un Estado Democrático”*⁶⁹, e insta el Estado a establecer centros culturales en cada uno de los municipios que *“promueven la identidad nacional y fortalezcan el tejido social”*⁷⁰. La estrategia a implementar se aportará al logro del Resultado 1.1, en relación con el fortalecimiento del tejido social y la promoción de la identidad nacional mediante el establecimiento de centros culturales⁷¹.

La estrategia a ser impulsado con el MICUDE para el establecimiento de los Museos Regionales, será complementada con apoyo a organizaciones de la sociedad civil – y especialmente organizaciones de víctimas – que impulsan espacios de memoria como museos al nivel local.

⁶⁸ Ver Plan Nacional de Desarrollo, K’atun Nuestra Guatemala 2032, página 400.

⁶⁹ Ídem, página 177.

⁷⁰ Ídem, página 204.

⁷¹ Ídem, página 202

3. Justicia de Transición y Desarrollo Humano Sostenible

Con el fin de empoderar a comunidades de víctimas tanto en el acceso y ejercicio de sus derechos en el marco de la justicia de transición, como más ampliamente al desarrollo mediante la participación, se implementará un proyecto en una selección de comunidades de los tres municipios del área Ixil – Nebaj, Chajul y Cotzal - del Departamento del Quiché. Se implementará en cada comunidad un proceso que contempla un fortalecimiento de conocimientos y capacidades en relación con el acceso a la verdad, la justicia y la reparación integral, así como para la participación activa en el marco de los Consejos de Desarrollo. Dichos procesos serán impulsados por un consorcio de organizaciones, incluyendo organizaciones locales, de la sociedad civil con una trayectoria comprobada y conocimiento profundo del lugar (“Proyecto Piloto”).

La implementación del Proyecto Piloto se realizará en coordinación con el Programa Conjunto Desarrollo Rural Ixil⁷², en las mismas comunidades y municipios del Área Ixil.

La selección de las comunidades a ser incluidas tanto el Proyecto Piloto como en el Programa Conjunto se realizará mediante un Diagnóstico, tomando en cuenta los siguientes criterios, entre otros:

- 1) Participación (actualmente o previamente) de las comunidades en procesos de recuperación de la memoria histórica (Derecho a la Verdad);
- 2) Participación (actualmente o previamente) de las comunidades en investigaciones y procesos penales para víctimas de graves violaciones a los derechos humanos (Derecho a la Justicia);
- 3) Participación (actualmente o previamente) de las comunidades en la búsqueda de víctimas mediante investigaciones antropológicas forenses, con acompañamiento psicosocial y jurídico-social (Derecho a la verdad y reparación);
- 4) Participación de las comunidades (actualmente o previamente) en la gestión de resarcimiento integral frente al PNR;
- 5) Listados de comunidades priorizados para la atención por parte del PNR mediante acuerdos con organizaciones de víctimas (Derecho a la Reparación);
- 6) Existencia y funcionamiento de los COCODES en las comunidades (No-repetición)..

Adicionalmente, se tomará en cuenta criterios geográficos basados en ubicación territorial en microcuencas, comunidades con mayor porcentaje de familias en condiciones de infra-subsistencia y subsistencia, con base en los criterios del Programa de Agricultura Familiar (PAFEC) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) y de la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral

⁷² Proyecto a ser implementado por PNUD, FAO y OPS/OMS.

(PNDRI), así como otros criterios relacionados a la relacionamiento de las comunidades con cadenas productivas.

Una vez seleccionadas las comunidades tras el Diagnóstico, se realizará un *Estudio de Percepciones* en la población sobre el nivel acceso a sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la participación ciudadana en el desarrollo humano, para determinar una línea basal e identificar las prioridades de las víctimas en dichos procesos.

Se incorporará el enfoque de género en dicho Estudio de Percepciones para contar con información sobre el nivel de acceso percibido por hombres y mujeres, la naturaleza y calidad de su respectiva participación en los procesos de verdad-justicia-reparación y participación ciudadana en el desarrollo, así como sus perspectivas sobre prioridades a futuro.

Tras la implementación del Proyecto Piloto, se evaluará la factibilidad de replicar el proyecto en los otros departamentos mayormente afectados por el EAI.

E. Componente Articulación

Se promoverá articulación en tres niveles:

1. Articulación Temática:

Articulación entre el Estado y la sociedad civil: en cada componente se producirá mediante una cuidadosa identificación de las iniciativas estratégicas a apoyar, en los cuales existen condiciones que permiten alianzas efectivas y constructivas entre Estado y sociedad civil.

a) *Articulación y Alianzas en el Componente de Verdad*

En relación con el tema de la búsqueda de desaparecidas, se buscará las alianzas entre socios no-estatales para hacer incidencia en el Congreso para la aprobación de la ley 3590, y para aportar a procesos de búsqueda de personas desaparecidas.

En relación con la difusión de la memoria histórica, se promoverá articulación entre IIARS y el Memorial para la Concordia con todos los demás socios en el Programa para que puedan aportar a la construcción y difusión de contenidos de la PVM, así como a la realización de los diálogos sociales sobre la memoria histórica y la justicia de transición.

b) Articulación y Alianzas en el Componente de Justicia

Se promoverá una continuación y revitalización de la articulación entre el MP y las organizaciones de la sociedad civil en calidad de querellantes adhesivos o entidades asesoras a las víctimas en los casos priorizados por el MP en esta segunda fase del PAJUST. Dicha articulación será mediante el establecimiento de mesas de trabajo específicas para cada caso, en las cuales participarán, además de los fiscales y los querellantes, los peritos del AHPN y de la FAFG con el fin de identificar medios de prueba archivísticos o forenses.

Por otro lado, se mantendrá el Espacio de Derechos Humanos como un espacio de coordinación de alto nivel entre la FSDH, la UCEEAI, y la Secretaría de Política Criminal del MP, así como los querellantes adhesivos y entidades asesoras, con el fin de abordar temáticas comunes entre los casos y relevantes a la lucha contra la impunidad en casos del EAI en general.

Se continuará asimismo, la facilitación de las Mesas de Estrategia Jurídica y de Capacitación, dos espacios específicos que permiten la participación de las organizaciones querellantes y organizaciones asesores en procesos de fortalecimiento institucional del MP.

c) Articulación y Alianzas en el componente de Reparación

Se continuará el apoyo a las mesas regionales de articulación entre el PNR, la FAFG y las organizaciones jurídico-sociales y psico-sociales que apoyan a las víctimas en procesos de exhumaciones e inhumaciones, con la perspectiva de ampliar las coordinaciones a incluir *otras* medidas de resarcimiento en beneficio de la integralidad de la respuesta a las víctimas en estos procesos.

Adicionalmente, se establecería una mesa de coordinación entre el RENAP, el PNR, la FAFG, el AGCA/AHPN, y las organizaciones jurídico-sociales y psicosociales, para abordar específicamente la problemática de la documentación personal de las víctimas.

d) Articulación y Alianzas en el componente de No-Repetición

Se promoverá la articulación entre el MINEDUC y la sociedad civil mediante la Mesa de Educación para la Paz, la Memoria Histórica y los Derechos Humanos, en coordinación con IIARS⁷³, y se promoverá

⁷³ El Instituto Internacional de Aprendizaje para la Reconciliación Social – IIARS - implementará el Proyecto "Difusión, educación y diálogo social en promoción de la memoria y la justicia de transición" durante la segunda fase del PAJUST en la modalidad NIM ONG, y tendrá dentro de sus actividades la Secretaría Técnica de la Mesa de Educación para la Paz, la Memoria y los Derechos Humanos.

articulación entre el MICUDE, el PNR y organizaciones de la sociedad civil que impulsen espacios de memoria como museos, con el fin de aportar el desarrollo y establecimiento de la red de Museos Regionales de la Memoria Histórica y la Cultura de Paz, en los departamentos más afectados por el EAI.

2. Articulación Departamental

Se facilitará Mesas de Articulación Departamental en al menos tres de los departamentos más afectados por el EAI (Quiché, Huehuetenango, Chimaltenango, Alta Verapaz y Baja Verapaz), entre socios estatales y no-estatales, y se promoverán la focalización de sus acciones al nivel comunitario para empoderar el acceso de las víctimas a sus derechos en dichos lugares.

3. Articulación entre Componentes

La articulación de los principales socios del Programa (los socios estatales más la FAFG e IIARS), se promoverá mediante el desarrollo e implementación de Convenios de Cooperación bilateral o multilateral. Muchos de dichos convenios fueron firmados en la primera fase de PAJUST, significando que se dará continuidad de los mismos. Nuevos convenios para incluir los nuevos socios también serán desarrollados.

La Junta de Coordinación Ejecutiva será el espacio principal para el seguimiento de los avances en la articulación entre componentes.

III. MARCO DE RESULTADOS Y RECURSOS

Efectos del Marco de Resultados y Recursos del Programa País 2015-2019: Las instituciones del sector justicia incrementan la eficiencia y efectividad en el esclarecimiento de casos, en los niveles de inclusión y equidad; El Estado aplica mecanismos integrales de justicia de transición para las víctimas del enfrentamiento armado interno, en coordinación con la sociedad civil, de acuerdo a los marcos internacionales de Derechos humanos..	
Indicadores de efecto, incluyendo línea basal y metas, del Marco de Resultados y Recursos del Programa País 2015-2019: I: # de sentencias sobre casos de graves violaciones a DDHH, cometidas durante el EAI, acorde a estándares internacionales de DDHH.; # de personas fallecidas y/o desaparecidas durante el EAI identificadas y sus restos restituidos. LB: 8 sentencias sobre casos de graves violaciones a DDHH, cometidas durante el EAI, acorde a estándares internacionales de DDHH; LB: 1,975 M: 18 sentencias sobre casos de graves violaciones a DDHH, cometidas durante el EAI, acorde a estándares internacionales de DDHH; M: 2,875	
Producto Programa País 2015-2019: Víctimas del EAI gozan del pleno ejercicio de los derechos de la Justicia de Transición y amplían sus medios de vida.	
Indicadores de Producto Programa País 2015-2019: I: # de archivos del EAI digitalizados y procesados puestos disposición del público de las instituciones del sector justicia por el AHPN. LB: 17,000,000; M 2019: 25,000.000 I: # de casos judiciales en los cuales se utilizan instructivos y protocolos de investigación de casos de violaciones a los DDHH, cometidos durante del EAI; LB 2013: 19 ; M 2019: 30 I: # de víctimas del EAI y familiares que acceden a medidas de reparación en el marco de la Justicia de Transición. LB: 20,000 ; M: 30,000	
Efectos Relacionado del Plan Estratégico 2014-2017: Primario Efecto 3: Instituciones de los países fortalecidas para dar acceso universal en forma progresiva a los servicios básicos. Secundario Efecto 2: Satisfacción de las expectativas de los ciudadanos respecto de la participación, desarrollo, Estado de Derecho y responsabilidad con sistemas más sólidos de gobernanza democrática.	
Estrategia de Implementación: PNUD en articulación con: El Ministerio de Cultura y Deportes - MICUDE; Ministerio de Educación – MINEDUC; Ministerio Público – MP; Corte Suprema de Justicia y el Organismo Judicial – OJ; Programa Nacional de Resarcimiento – PNR; Registro Nacional de Personas – RENAP; Organizaciones de la sociedad civil.	
Títulos de los Proyectos/ ID (ATLAS Award ID): 81970- PAJUST II - Articulación y nuevas alianzas para el impulso de la justicia de transición.	

COMPONENTE VERDAD

PRODUCTOS ESPERADOS	METAS ANUALES	ACTIVIDADES INDICATIVAS	RESPONSABLE	INSUMOS
<p>P1: Ejercicio del derecho de las víctimas del EAI a la verdad fortalecido</p> <p>LI: # de alianzas entre organizaciones de la sociedad civil y el Estado</p> <p>LB: Sociedad civil cuenta con capacidades técnicas y experticia previa para establecer alianzas estratégicas con el Estado.</p> <p>MI: Al menos 2 alianzas entre organizaciones de la sociedad civil y el Estado, impulsados.</p>	<p>Meta (Año 1): 2 alianzas entre organizaciones de la sociedad civil y el Estado, impulsados.</p> <p>Meta (Año 2): Alianzas entre organizaciones de la sociedad civil y el Estado, monitoreados.</p> <p>Meta (Año 3): Alianzas entre organizaciones de la sociedad civil y el Estado, monitoreados.</p> <p>Meta (Año 4): Alianzas entre organizaciones de la sociedad civil y el Estado, monitoreados; Lecciones aprendidas y buenas prácticas de la implementación de las alianzas, sistematizadas y difundidas.</p>	<p>AR 1: Sociedad civil fortalecida para construir alianzas con el Estado en promoción del derecho a la verdad para las víctimas del enfrentamiento armado interno.</p> <p>Sub-actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Asistencia técnica para convocar, seleccionar, implementar, y monitorear proyectos de fortalecimiento de la sociedad civil en alianza con el Estado. -Asistencia técnica para la sistematización y difusión de lecciones aprendidas y buenas prácticas de la implementación de las alianzas 	PAJUST DIM	Presupuesto Total US\$ 246,146.43

COMPONENTE JUSTICIA

PRODUCTOS ESPERADOS	METAS ANUALES	ACTIVIDADES INDICATIVAS	RESPONSABLE	INSUMOS
<p>P2: Ejercicio del derecho de las víctimas del EAI a la justicia fortalecido.</p> <p>I: # de casos del EAI en los cuales se utilizan instructivos y protocolos de investigación, incluyendo casos de violencia sexual contra mujeres y casos conexados en el marco de la Estrategia de Investigación y Persecución Penal</p> <p>LB: 19 casos, incluyendo 4 casos de violencia sexual y 1 caso conexado.</p> <p>M: 30 casos del EAI en los cuales se utilizan instructivos y protocolos de investigación incluyendo 1 caso de violencia sexual y 4 casos conexados en el marco de la Estrategia de Investigación y Persecución Penal.</p>	<p>Meta (Año 1): Dos casos del EAI en los cuales se utilizan instructivos y protocolos de investigación incluyendo 1 caso de violencia sexual contra las mujeres y 1 caso conexados en el marco de la Estrategia de Investigación y Persecución Penal</p> <p>Meta (Año 2): Tres casos adicionales del EAI en los cuales se utilizan instructivos y protocolos de investigación incluyendo 1 caso de violencia sexual contra mujeres y 1 caso conexado en el marco de la Estrategia de Investigación y Persecución Penal</p> <p>Meta (Año 3): Tres casos adicionales del EAI en los cuales se utilizan instructivos y protocolos de investigación incluyendo 1 caso de violencia sexual contra mujeres y 1 caso conexado en el marco de la Estrategia de Investigación y Persecución Penal</p> <p>Meta (Año 4): Tres casos adicionales del EAI en los cuales se utilizan instructivos y protocolos de investigación incluyendo 1 caso de violencia sexual contra las mujeres y 1 caso conexado en el marco de la Estrategia de Investigación y Persecución Penal.</p>	<p>AR1: La Fiscalía de Sección de Derechos Humanos del MP fortalecida para implementar la persecución penal estratégica en casos del EAI, con base el análisis de fenómenos criminales y asegurando apoyo psicosocial a las víctimas.</p> <p>Sub-actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Asistencia técnica y adquisición de equipo para el desarrollo de capacidades en análisis criminal en la FSDH. -Asistencia técnica para la elaboración de una Estrategia de Investigación y Persecución penal para casos del EAI con enfoque de género, incluyendo conexión de casos y casos de violencia sexual contra las mujeres. -Asistencia técnica y formación para el fortalecimiento de las imputaciones a la luz de los criterios de la reparación digna y con enfoque de género. -Elaboración de peritajes especializados para el fortalecimiento de hipótesis fiscal en casos priorizados o conexados según la Estrategia de Investigación y Persecución Penal de los casos del EAI. -Implementación de procesos formativos especializados en la investigación y persecución penal estratégica de casos del EAI, incluyendo casos de violencia sexual contra las mujeres, para fiscales del MP, especialmente de la UCEEAI. -Asistencia técnica para la facilitación de mesas de trabajo entre MP, querellantes adhesivos, entidades asesoras y PDH en los casos priorizados o conexados, según la Estrategia de Investigación y Persecución Penal de los casos del EAI. -Asistencia técnica para la revisión, actualización, implementación y monitoreo de los protocolos de atención psicosocial de víctimas, con enfoque de género y con especial atención a mujeres víctimas de violencia sexual, en casos del EAI. 	MP	Presupuesto total \$314,814.82 USD

<p>I: # de fallos en casos del EAI conformes a los estándares y principios internacionales de derechos humanos.</p> <p>LB: 10 fallos</p> <p>M: 18 fallos</p>	<p>Meta (Año 1): 2 fallos en casos del EAI conformes a los estándares y principios internacionales de derechos humanos.</p> <p>Meta (Año 2): 2 fallos adicionales en casos del EAI conformes a los estándares y principios internacionales de derechos humanos.</p> <p>Meta (Año 3): 2 fallos adicionales en casos del EAI conformes a los estándares y principios internacionales de derechos humanos.</p> <p>Meta (Año 4): 2 fallos adicionales en casos del EAI conformes a los estándares y principios internacionales de derechos humanos.</p>	<p>AR2: El OJ fortalecido para juzgar a los casos del EAI conforme a los estándares y principios internacionales de derechos humanos.</p> <p>Sub-actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Asistencia técnica para el diseño de una evaluación de capacidades de jueces y análisis de sentencias en materia del dominio de estándares y principios internacionales de derechos humanos. -Asistencia técnica para la elaboración de una malla curricular para la aprobación de la Escuela de Estudios Judiciales del OJ. 	<p>PAJUST DIM – OACNUDH</p>	<p>Presupuesto total \$69,444.45 USD</p>
<p>I: # de alianzas entre organizaciones de la sociedad civil y el Estado</p> <p>LB: Sociedad civil cuenta con capacidades técnicas y experticia previa para establecer alianzas estratégicas con el Estado.</p> <p>M: Al menos 2 alianzas entre organizaciones de la sociedad civil y el Estado, impulsados.</p>	<p>Meta (Año 1): 2 alianzas entre organizaciones de la sociedad civil y el Estado, impulsados.</p> <p>Meta (Año 2): Alianzas entre organizaciones de la sociedad civil y el Estado, monitoreados.</p> <p>Meta (Año 3): Alianzas entre organizaciones de la sociedad civil y el Estado, monitoreados.</p> <p>Meta (Año 4): Alianzas entre organizaciones de la sociedad civil y el Estado, monitoreados; Lecciones aprendidas y buenas prácticas de la implementación de las alianzas, sistematizadas y difundidas.</p>	<p>AR3: Sociedad civil fortalecida para construir alianzas con el Estado en promoción del derecho a la justicia para las víctimas del enfrentamiento armado interno.</p> <p>Sub-actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Asistencia técnica para convocar, seleccionar, implementar, y monitorear proyectos de fortalecimiento de la sociedad civil en alianza con el Estado. -Asistencia técnica para la sistematización y difusión de lecciones aprendidas y buenas prácticas de la implementación de las alianzas 	<p>PAJUST DIM</p>	<p>Presupuesto Total US\$ 246,146.43</p>

COMPONENTE REPARACIÓN

<p>P3: Ejercicio del derecho de las víctimas del EAI a la reparación fortalecido.</p> <p>I: # de víctimas, desglosado por género, del EAI que acceden a medidas de reparación. LB: 20,000 M: 26,000</p> <p>I: # de comunidades que cuentan con planes de resarcimiento integral y con enfoque de género. LB: 0 M: 45 comunidades que cuentan con planes de resarcimiento integral y con enfoque de género.</p>	<p>Meta (Año 1): Condiciones institucionales preparadas.</p> <p>Meta (Año 2): 15 comunidades de víctimas del EAI cuentan con planes de resarcimiento integral y con enfoque de género; 2,000 víctimas, de las cuales al menos 1250 son mujeres, reciben medidas de resarcimiento.</p> <p>Meta (Año 3): 15 comunidades de víctimas del EAI cuentan con planes de resarcimiento integral y con enfoque de género; 2,000 víctimas de las cuales al menos 1250 son mujeres, reciben medidas de resarcimiento.</p> <p>Meta (Año 4): 15 comunidades de víctimas del EAI cuentan con planes de resarcimiento integral y con enfoque de género; 2,000 víctimas de las cuales al menos 1250 son mujeres, reciben medidas de resarcimiento.</p>	<p>AR1: El PNR fortalecido para reparar víctimas de graves violaciones a los derechos humanos del EAI integralmente y con enfoque de género.</p> <p>Sub-actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Asistencia técnica para una actualización de la Política Pública de Resarcimiento incluyendo un fortalecimiento del enfoque de género. -Asistencia técnica y adquisición de herramientas informáticas (software) para implementar el Registro Nacional de Víctimas y fortalecer la planificación e implementación integral y con enfoque de género de las medidas de resarcimiento, especialmente en los departamentos más afectados por el EAI. -Asistencia técnica para apoyar el establecimiento y funcionamiento del Consejo Consultivo de Organizaciones de Víctimas, garantizando la participación igualitaria de hombres y mujeres víctimas, y para la facilitación desde las sedes del PNR de mesas de coordinación con los Comités de Víctimas y sus representantes, especialmente en los departamentos más afectados. 	<p>PNR</p>	<p><i>Presupuesto total</i> \$41,666.67 USD</p>
---	---	--	------------	---

<p>I: # de víctimas del EAI documentadas.</p> <p>LB: 0</p> <p>M: 5,000 víctimas del EAI documentados.</p>	<p>Meta (Año 1): Condiciones institucionales preparadas.</p> <p>Meta (Año 2): 1000 víctimas están documentados.</p> <p>Meta (Año 3): 2000 víctimas están documentados.</p> <p>Meta (Año 4): 2000 víctimas están documentados.</p>	<p>AR2: RENAP fortalecido para mejorar el acceso de víctimas del EAI a documentación personal</p> <p>Sub-actividades</p> <ul style="list-style-type: none"> -Asistencia técnica para realizar un diagnóstico sobre las necesidades y dificultades de las víctimas del EAI, especialmente las mujeres víctimas, y en particular en los departamentos más afectados por el EAI en obtención de documentos personales, para la elaboración de rutas de solución. -Asistencia técnica y adquisición de equipamiento para la facilitación de procesos de documentación de víctimas del EAI, especialmente las mujeres víctimas, en los departamentos más afectados por el EAI. -Asistencia técnica para la facilitación de un espacio de coordinación entre RENAP, el PNR, el MP y las organizaciones de la sociedad civil para el seguimiento de documentación de víctimas del EAI. 	PAJUST DIM	<p>Presupuesto total</p> <p>\$27,777.78 USD</p>
<p>I: # de alianzas entre organizaciones de la sociedad civil y el Estado</p> <p>LB: Sociedad civil cuenta con capacidades técnicas y experiencia previa para establecer alianzas estratégicas con el Estado.</p> <p>M: Al menos 2 alianzas entre organizaciones de la sociedad civil y el Estado, impulsados.</p>	<p>Meta (Año 1): 2 alianzas entre organizaciones de la sociedad civil y el Estado, impulsados.</p> <p>Meta (Año 2): Alianzas entre organizaciones de la sociedad civil y el Estado, monitoreados.</p> <p>Meta (Año 3): Alianzas entre organizaciones de la sociedad civil y el Estado, monitoreados.</p> <p>Meta (Año 4): Alianzas entre organizaciones de la sociedad civil y el Estado, monitoreados; Lecciones aprendidas y buenas prácticas de la implementación de las alianzas, sistematizadas y difundidas.</p>	<p>AR3: Sociedad civil fortalecida para construir alianzas con el Estado en promoción del derecho a la reparación para las víctimas del conflicto armado interno.</p> <p>Sub-actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Asistencia técnica para convocar, seleccionar, implementar, y monitorear proyectos de fortalecimiento de la sociedad civil en alianza con el Estado. -Asistencia técnica para la sistematización y difusión de lecciones aprendidas y buenas prácticas de la implementación de las alianzas 	PAJUST DIM	<p>Presupuesto total</p> <p>\$246,146.43 USD</p>

COMPONENTE NO-REPETICIÓN

<p>P4: Garantías de no-repetición fortalecidas mediante la educación, la dignificación y el desarrollo.</p> <p>I: # de estudiantes desglosados por sexo reciben enseñanza en el marco de una Pedagogía de la Memoria Histórica u cultura de paz.</p> <p>LB: 0</p> <p>Mi: 4,000</p>	<p>Meta (Año 1): Diagnostico nacional sobre la enseñanza de estudiantes de una Pedagogía de Memoria Histórica y Cultura de Paz, realizado.</p> <p>Meta (Año 2): Pedagogía de Memoria Histórica y Cultura de Paz, y asociados materiales, elaborados.</p> <p>Meta (Año 3): 2,000 estudiantes reciben enseñanza en el marco de una Pedagogía de Memoria Histórica y Cultura de Paz.</p> <p>Meta (Año 4): 2,000 estudiantes reciben enseñanza en el marco de una Pedagogía de Memoria Histórica y Cultura de Paz.</p>	<p>AR1: El MINEDUC fortalecido para institucionalizar e implementar una pedagogía de la memoria histórica y cultura de paz en el marco de la formación ciudadana.</p> <p>Sub-actividades</p> <ul style="list-style-type: none"> -Asistencia técnica para el desarrollo de un diagnostico nacional sobre la enseñanza de la memoria histórica y la cultura de paz en el sistema educativo. -Asistencia técnica para la elaboración, institucionalización, e implementación, monitoreo y evaluación de una Pedagogía de la Memoria Histórica y Cultura de Paz, y asociados materiales asegurando el enfoque de género en los mismos. -Procesos de formación y entrega educativa a docentes promoviendo participación igualitaria de hombres y mujeres, sobre la Pedagogía de la Memoria Histórica y Cultura de Paz y asociados materiales, especialmente en los departamentos más afectados por el EAI. 	<p>MINEDUC</p>	<p>Presupuesto total \$92,592.6 USD</p>
---	--	---	----------------	--

<p>I: # de Museos de la. Memoria Histórica y Cultura de Paz, instalados.</p> <p>LB: 0</p> <p>M: 4</p>	<p>Meta (Año 1): Condiciones institucionales preparadas.</p> <p>Meta (Año 2): 1 Museo de la Memoria Histórica y Cultura de Paz, instalado.</p> <p>Meta (Año 3): 2 adicionales Museos de la Memoria Histórica y Cultura de Paz, instalados.</p> <p>Meta (Año 4): 1 adicional Museo de la Memoria Histórica y Cultura de Paz, instalado.</p>	<p>AR2: El MICUDE fortalecido para la instalación de una red de Museos de la Memoria Histórica y la Cultura de Paz, en alianza con la sociedad civil.</p> <p>Sub-actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Asistencia técnica para el desarrollo de un diagnóstico nacional sobre el abordaje de la memoria histórica y cultura de paz en los museos del MICUDE y de la sociedad civil. -Asistencia técnica para el diseño museográfico del contenido de museos de la memoria histórica y cultura de paz, con enfoque de género, incluyendo en los departamentos más afectados por el EAI. -Equipamiento de museos de la memoria histórica y cultura de paz en los departamentos más afectados por el EAI. 	MICUDE	Presupuesto total \$69,444.45 USD
<p>I: # de alianzas entre organizaciones de la sociedad civil y el Estado</p> <p>LB: Sociedad civil cuenta con capacidades técnicas y experticia previa para establecer alianzas estratégicas con el Estado.</p> <p>M: Al menos 2 alianzas entre organizaciones de la sociedad civil y el Estado, impulsados.</p>	<p>Meta (Año 1): 2 alianzas entre organizaciones de la sociedad civil y el Estado, impulsados.</p> <p>Meta (Año 2): Alianzas entre organizaciones de la sociedad civil y el Estado, monitoreados.</p> <p>Meta (Año 3): Alianzas entre organizaciones de la sociedad civil y el Estado, monitoreados.</p> <p>Meta (Año 4): Alianzas entre organizaciones de la sociedad civil y el Estado, monitoreados; Lecciones aprendidas y buenas prácticas de la implementación de las alianzas, sistematizadas y difundidas.</p>	<p>AR3: Sociedad civil fortalecida para construir alianzas con el Estado en promoción de medidas de no-repetición para las víctimas del enfrentamiento armado interno</p> <p>Sub-actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Asistencia técnica para convocar, seleccionar, implementar, y monitorear proyectos de fortalecimiento de la sociedad civil en alianza con el Estado. -Asistencia técnica para la sistematización y difusión de lecciones aprendidas y buenas prácticas de la implementación de las alianzas. 	PAJUST DIM	Presupuesto total \$246,146.43 USD

<p>I: # de comunidades en el área Ixil con procesos implementados, con enfoque de género, para el ejercicio de la verdad, justicia, reparación y participación ciudadana.</p> <p>LB: 0 comunidades con procesos implementados, con enfoque de género, para el ejercicio de la verdad, justicia, reparación y participación ciudadana de forma integral.</p> <p>M: 10 comunidades en el área Ixil con procesos implementados, con enfoque de género, para el ejercicio de la verdad, justicia, reparación y participación ciudadana en procesos de desarrollo.</p> <p># 1 Estudio de Percepciones que indique el nivel de empoderamiento de las personas para el ejercicio de la verdad, justicia, reparación y participación ciudadana de forma integral en comunidades del área Ixil.</p> <p>LB: No existe información sobre el nivel de ejercicio de la verdad, justicia, reparación y participación ciudadana de forma integral en comunidades del área Ixil.</p> <p>M: Estudio de Percepciones que indique el nivel de empoderamiento de las personas para el ejercicio de la verdad, justicia, reparación y participación ciudadana de forma integral en comunidades del área Ixil.</p>	<p>Meta (Año 1): Diagnóstico realizado en los tres municipios del área Ixil (Nebaj, Chajul y Cotzal) para seleccionar 10 comunidades; Estudio de Percepciones que indique el nivel de empoderamiento de las personas para el ejercicio de la verdad, justicia, reparación y participación ciudadana de forma integral en comunidades del área Ixil, realizado; Proyecto piloto diseñado para implementación en las 10 comunidades.</p> <p>Meta (Año 2): Proyecto Piloto implementado en un 30% en las 10 comunidades del Área Ixil; Medición de percepciones del nivel de ejercicio de la verdad, justicia, reparación y participación ciudadana de forma integral en comunidades del área Ixil, realizada</p> <p>Meta (Año 3): Proyecto Piloto implementado en un 60% en las 10 comunidades del Área Ixil; Medición de percepciones del nivel de ejercicio de la verdad, justicia, reparación y participación ciudadana de forma integral en comunidades del área Ixil, realizada</p> <p>Meta (Año 4): Proyecto Piloto implementado en un 100% en las 10 comunidades del Área Ixil; Estudio de medición realizado, que muestre el nivel de incremento en la percepción de la población en las 10 comunidades sobre el nivel de ejercicio de la verdad, justicia, reparación y participación ciudadana de forma integral,</p>	<p>AR4: Víctimas del enfrentamiento armado interno en el área Ixil de Quiché empoderadas para ejercer sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la participación ciudadana en procesos de desarrollo.</p> <p>Sub-actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Asistencia técnica para el Diagnóstico para seleccionar 10 comunidades. -Diseño, aprobación, monitoreo y evaluación del Proyecto Piloto en las 10 comunidades seleccionadas. -Realizar el Estudio de Percepción que indique el nivel de empoderamiento de las personas para el ejercicio de la verdad, justicia, reparación y participación ciudadana de forma integral en comunidades del área Ixil, así como mediciones, y mediciones anuales para comprobar el incremento en el nivel de percepción de las personas 	<p>PAJUST DIM</p>	<p>Presupuesto total \$347,222.22 USD</p>
--	---	---	-------------------	--

GESTIÓN Y ARTICULACIÓN

<p>P5: Sistema de gestión y articulación fortalecido para asegurar la eficiente y efectiva conducción del Programa</p> <p>I: % de avance financiero y alcance de las metas anuales en el marco de la implementación del Programa incluyendo acciones estratégicas con los socios, encaminadas a fortalecer el análisis de género y el empoderamiento de las mujeres en proceso de la justicia de transición</p> <p>LB: Sistemas de gestión y articulación establecidos durante primera fase del PAJUST.</p> <p>M: 100% de ejecución financiero y alcance de las metas del Programa.</p>	<p>Meta (Año 1): 15% de avance financiero y alcance de las metas anuales.</p> <p>Meta (Año 2): 25% de avance financiero y alcance de las metas anuales.</p> <p>Meta (Año 3): 30% de avance financiero y alcance de las metas anuales</p> <p>Meta (Año 4): 30% de avance financiero y alcance de las metas anuales</p>	<p>AR1: Asistencia técnica para la gestión, y articulación de los proyectos en modalidad NIM y DIM.</p> <p>Sub-actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Asistencia técnica para la implementación del sistema de gestión permanente del Programa (planificación, gestión administrativo-financiero, coordinación, monitoreo, evaluación y sistematización). -Asistencia técnica para convocar, seleccionar, gestionar y monitorear proyectos con socios Estatales y con organizaciones de la sociedad civil en cada componente de verdad, justicia, reparación y no-repetición. -Asistencia técnica para la identificación y facilitación de espacios de articulación temática entre socios Estatales y de la sociedad civil en promoción de alianzas en los componentes de verdad, justicia, reparación y no repetición. -Asistencia técnica para la capacitación de los socios en materia de justicia de transición con enfoque de género. -Asistencia técnica para la elaboración de una estrategia de comunicación permanente para difundir las iniciativas del Programa y sus resultados a favor de la justicia de transición. 	<p>PAJUST DIM</p>	<p>Presupuesto total \$1,931,919.49 USD</p>
--	---	---	-------------------	--

Articulación Temática

1. Verdad:

- a) Espacio de articulación MICUDE (AHPN y AGCA), y sociedad civil a estimular el conocimiento, difusión y uso de los archivos, así como incidencia para la aprobación de una ley nacional de archivos.
- b) Espacio de articulación para incidencia en el Congreso para la aprobación de la ley 3590, y para aportar a procesos de búsqueda impulsados por la FAFG.
- c) Mesa de coordinación entre el PNR, la FAFG y el AHPN se promoverá mediante la implementación del convenio de cooperación técnica firmada en 2014, en relación con el intercambio de información en sus bases de datos sobre víctimas de desaparición forzada.
- d) Espacio de articulación entre IIARS y el Memorial para la Concordia con todos los demás socios para estimular el conocimiento, difusión y uso del Plataforma Virtual, así como de los diálogos sociales relacionados.

2. Justicia:

- a) Mesas de trabajo entre MP y querellantes adhesivos, AHPN y FAFG, sobre casos priorizados por el MP
- b) Espacio de Derechos Humanos: para la coordinación de alto nivel entre la FSDH, la Secretaría de Política Criminal del MP, así como los querellantes adhesivos y entidades asesoras, con el fin de abordar temáticas comunes entre los casos y relevantes a la lucha contra la impunidad en casos del enfrentamiento en general.

3. Reparación:

- a) Mesa de articulación entre el PNR, la FAFG y organizaciones de la sociedad civil sobre exhumaciones e inhumaciones.
- b) Mesa de coordinación entre el RENAP, el PNR, la FAFG y las organizaciones jurídico-sociales y psicosociales, para rutas de solución a la problemática de la documentación personal de las víctimas.

4. No-Repetición:

Espacio de articulación entre organizaciones de la sociedad civil para promover la institucionalización de una pedagogía de la memoria historia y cultura de paz por parte el MINEDUC.

Articulación departamental

1. Mesa departamentales de coordinación entre socios al menos tres de los siguientes departamentos: Quiché, Huehuetenango, Chimaltenango, Alta Verapaz, y Baja Verapaz

Articulación entre componentes

1. Se promoverá la articulación entre el AHPN, el IIARS, el MP, el PNR, la RENAP, la FAFG y el PNR mediante la firma de Convenios de Cooperación los cuales serán monitoreados en las reuniones de la Junta de Coordinación Ejecutiva.

Articulación entre cooperantes

1. Mesa de coordinación programática entre cooperantes en materia de justicia de transición.

III. PLAN ANUAL OPERATIVO 2015-2018

Productos (outputs) esperados del proyecto	Actividades planificadas	Calendario				Responsable específico	Presupuesto previsto				
		A1	A2	A3	A4		Fuente	Donante	Código	Descripción	Monto US\$
Componente Verdad											
Producto 1	US\$ 246,146.43										
Ejercicio del derecho de las víctimas del EAI a la verdad fortalecido.	AR 1: Sociedad civil fortalecida para construir alianzas con el Estado en promoción del derecho a la verdad para las víctimas del enfrentamiento armado interno.										
I: # de alianzas entre organizaciones de la sociedad civil y el Estado	1.1.1 Asistencia técnica para convocar, seleccionar, implementar, y monitorear proyectos de fortalecimiento de la sociedad civil en alianza con el Estado	X	X			EQUIPO PAJUST II	30000	00555			
LB: Sociedad civil cuenta con capacidades técnicas y experticia previa para establecer alianzas estratégicas con el Estado.											
M: Al menos 2 alianzas entre organizaciones de la sociedad civil y el Estado, impulsados.	1.1.2 Asistencia técnica para la sistematización y difusión de lecciones aprendidas y buenas prácticas de la implementación de las alianzas.		X			EQUIPO PAJUST II	30000	00555			

Componente Justicia												
Producto 2 Ejercicio del derecho de las víctimas del EAI a la justicia fortalecido	AR1: La Fiscalía de Sección de Derechos Humanos del MP fortalecida para implementar la persecución penal estratégica en casos del EAI, con base el análisis de fenómenos criminales y asegurando apoyo psicosocial a las víctimas											
	I: # de casos del EAI en los cuales se utilizan instructivos y protocolos de investigación, incluyendo casos de violencia sexual contra mujeres y casos conexados en el marco de la Estrategia de Investigación y Persecución Penal	1.1.1	Asistencia técnica y adquisición de equipo para el desarrollo de capacidades en análisis criminal en la FSDH	X	X	X	X	X	EQUIPO PAJUST II y MP	30000	00555	US\$ 314,814.82
		1.1.2	Asistencia técnica para la elaboración de una Estrategia de Investigación y Persecución penal para casos del EAI con enfoque de género, incluyendo conexión de casos y casos de violencia sexual contra las mujeres	X					EQUIPO PAJUST II y MP	30000	00555	
	LB: 19 casos, incluyendo 4 casos de violencia sexual y 1 caso conexado.	1.1.3	Asistencia técnica y formación para el fortalecimiento de las imputaciones a la luz de los criterios de la reparación digna y con enfoque de género	X	X				EQUIPO PAJUST II y MP	30000	00555	
		1.1.4	Elaboración de peritajes especializados para el fortalecimiento de hipótesis fiscal en casos prioritizados o conexados según la Estrategia de Investigación y Persecución Penal de los casos del EAI.	X	X	X	X		EQUIPO PAJUST II y MP	30000	00555	
	M: 30 casos del EAI en los cuales se utilizan instructivos y protocolos de investigación incluyendo 1 casos de violencia sexual y 4 casos conexados en el marco de la Estrategia de Investigación y Persecución Penal.	1.1.5	Implementación de procesos formativos especializados en la investigación y persecución penal estratégica de casos del EAI, incluyendo casos de violencia sexual contra las mujeres, para fiscales del MP, especialmente de la UCEEAI.	X	X	X	X		EQUIPO PAJUST II y MP	30000	00555	
		1.1.6	Asistencia técnica para la facilitación de mesas de trabajo entre MP, querrelantes adhesivos, entidades asesoras y PDH en los casos prioritizados o conexados, según la Estrategia de Investigación y Persecución Penal de los casos del EAI	X	X	X	X		EQUIPO PAJUST II y MP	30000	00555	
		1.1.7	Asistencia técnica para la revisión, actualización, implementación y monitoreo de los protocolos de atención psicosocial de víctimas, con enfoque de género y con especial atención a mujeres víctimas de violencia sexual, en casos del EAI	X	X	X	X		EQUIPO PAJUST II y MP	30000	00555	

I: # de fallos en casos del EAI conformes a los estándares y principios internacionales de derechos humanos. LB: 10 fallos M: 18 fallos	AR2: El OJ fortalecido para juzgar a los casos del EAI conforme a los estándares y principios internacionales de derechos humanos										US\$ 69,444.45
	2.1.1 Asistencia técnica para el diseño de una evaluación de capacidades de jueces y análisis de sentencias en materia del dominio de estándares y principios internacionales de derechos humanos	X						EQUIPO PAJUST II y OACNUDH	30000	00555	
	2.1.2 Asistencia técnica para la elaboración de una malla curricular para la aprobación de la Escuela de Estudios Judiciales del OJ	X	X	X				EQUIPO PAJUST II y OACNUDH	30000	00555	
I: # de alianzas entre organizaciones de la sociedad civil y el Estado LB: Sociedad civil cuenta con capacidades técnicas y experticia previa para establecer alianzas estratégicas con el Estado. M: Al menos 2 alianzas entre organizaciones de la sociedad civil y el Estado, impulsados.	AR3: Sociedad civil fortalecida para construir alianzas con el Estado en promoción del derecho a la justicia para las víctimas del enfrentamiento armado interno										US\$ 246,146.43
	3.1.1 Asistencia técnica para convocar, seleccionar, implementar, y monitorear proyectos de fortalecimiento de la sociedad civil en alianza con el Estado	X	X					EQUIPO PAJUST II	30000	00555	
	3.1.2 Asistencia técnica para la sistematización y difusión de lecciones aprendidas y buenas prácticas de la implementación de las alianzas	X						EQUIPO PAJUST II	30000	00555	

LB: Sociedad civil cuenta con capacidades técnicas y experiencia previa para establecer alianzas estratégicas con el Estado.	1.1.1 Asistencia técnica para convocar, seleccionar, implementar, y monitorear proyectos de fortalecimiento de la sociedad civil en alianza con el Estado.					EQUIPO PAJUST II	30000	00555		
Mr: Al menos 2 alianzas entre organizaciones de la sociedad civil y el Estado, impulsados.	1.1.2 Asistencia técnica para la sistematización y difusión de lecciones aprendidas y buenas prácticas de la implementación de las alianzas		X			EQUIPO PAJUST II	30000	00555		
Componente No-Repetición										
Producto 4: Garantías de no-repetición fortalecidas mediante la educación, la dignificación y el desarrollo	AR1: El MINEDUC fortalecido para institucionalizar e implementar una pedagogía de la memoria histórica y cultura de paz en el marco de la formación ciudadana.									US\$ 92,592.6
I: # de estudiantes desglosados por sexo reciben enseñanza en el marco de una Pedagogía de la Memoria Histórica u cultura de paz. LB: 0 M: 4,000	1.1.1 Asistencia técnica para el desarrollo de un diagnóstico nacional sobre la enseñanza de la memoria histórica y la cultura de paz en el sistema educativo	X				EQUIPO PAJUST II y MINEDUC	30000	00555		
	1.1.2 Asistencia técnica para la elaboración, institucionalización, e implementación, monitoreo y evaluación de una Pedagogía de la Memoria Histórica y Cultura de Paz, y asociados materiales asegurando el enfoque de género en los mismos	X	X	X	X	EQUIPO PAJUST II y MINEDUC	30000	00555		
	1.1.3 Procesos de formación y entrega educativa a docentes promoviendo participación igualitaria de hombres y mujeres, sobre la Pedagogía de la Memoria Histórica y Cultura de Paz y asociados materiales, especialmente en los departamentos más afectados por el EAI	X	X	X	X	EQUIPO PAJUST II y MINEDUC	30000	00555		
I: # de Museos de la. Memoria Histórica y Cultura de Paz, instalados. LB: 0 M: 4	AR2: El MICUDE fortalecido para la instalación de una red de Museos de la Memoria Histórica y la Cultura de Paz, en alianza con la sociedad civil.									US\$ 69,444.45
	2.1.1 Asistencia técnica para el desarrollo de un diagnóstico nacional sobre el abordaje de la memoria histórica y cultura de paz en los museos del MICUDE y de la sociedad civil.	X				EQUIPO PAJUST II y MICUDE	30000	00555		
	2.1.2 Asistencia técnica para el diseño museográfico del contenido de museos de la memoria histórica y cultura de paz, con enfoque de género, incluyendo en los departamentos más afectados por el EAI.	X	X	X	X	EQUIPO PAJUST II y MICUDE	30000	00555		
	2.1.3 Equipamiento de museos de la memoria histórica y cultura de paz en los departamentos más afectados por el EAI.		X	X	X	EQUIPO PAJUST II y MICUDE	30000	00555		

I: # de alianzas entre organizaciones de la sociedad civil y el Estado.	AR3: Sociedad civil fortalecida para construir alianzas con el Estado en promoción de medidas de no-repetición para las víctimas del enfrentamiento armado interno.														US\$ 246,146.43
LB: Sociedad civil cuenta con capacidades técnicas y experticia previa para establecer alianzas estratégicas con el Estado.	3.1.1 Asistencia técnica para convocar, seleccionar, implementar, y monitorear proyectos de fortalecimiento de la sociedad civil en alianza con el Estado	X	X						EQUIPO PAJUST II y	30000	00555				
M: Al menos 2 alianzas entre organizaciones de la sociedad civil y el Estado, impulsados.	3.1.2 Asistencia técnica para la sistematización y difusión de lecciones aprendidas y buenas prácticas de la implementación de las alianzas.		X						EQUIPO PAJUST II	30000	00555				
I: # de comunidades en el área Ixil con procesos implementados, con enfoque de género, para el ejercicio de la verdad, justicia, reparación y participación ciudadana. LB: 0 comunidades con procesos implementados, con enfoque de género, para el ejercicio de la verdad, justicia, reparación y participación ciudadana de forma integral. M: 10 comunidades en el área Ixil con procesos implementados, con enfoque de género, para el ejercicio de la verdad, justicia, reparación y participación ciudadana en procesos de desarrollo.	AR4: Víctimas del enfrentamiento armado interno en el área Ixil de Quiché empoderadas para ejercer sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la participación ciudadana en procesos de desarrollo.														US\$ 347,222.22
I: # 1 Estudio de Percepciones que indique el nivel de empoderamiento de las personas para el ejercicio de la verdad, justicia, reparación y participación ciudadana de forma integral en comunidades del área Ixil. LB: No existe información sobre el nivel de ejercicio de la verdad, justicia, reparación y participación ciudadana de forma integral en comunidades del área Ixil. M: Estudio de Percepciones que indique el nivel de empoderamiento de las personas para el ejercicio de la verdad, justicia, reparación y participación ciudadana de forma integral en comunidades del área Ixil.	4.1.1 Asistencia técnica para el Diagnóstico para seleccionar 10 comunidades.	X							EQUIPO PAJUST II	30000	00555				
	4.1.2 Diseño, aprobación, monitoreo y evaluación del Proyecto Piloto en las 10 comunidades seleccionadas.	X	X	X					EQUIPO PAJUST II	30000	00555				
	4.1.3 Realizar el Estudio de Percepción que indique el nivel de empoderamiento de las personas para el ejercicio de la verdad, justicia, reparación y participación ciudadana de forma integral en comunidades del área Ixil, así como mediciones, y mediciones anuales para comprobar el incremento en el nivel de percepción de las personas.	X	X	X					EQUIPO PAJUST II	30000	00555				

Componente Gestión y Articulación

[illegible]

IV. ARREGLOS DE GESTIÓN

El Programa PAJUST será implementado bajo: la modalidad DIM, a través de distintos proyectos que conforman el programa.

Para la modalidad DIM, el proyecto contará con un/a “Director/a” que será nombrado/a por la organización receptora de las Naciones Unidas, y quien será responsable, en nombre de la misma, de alcanzar los productos previstos en el proyecto, así como de su manejo administrativo y financiero. Se contará también con un equipo de gestión a cargo de los diferentes componentes del proyecto DIM del PAJUST. El Equipo de Coordinación de PAJUST contratado en la primera fase y durante la fase puente entre la primera y segunda fase del PAJUST, será contratado de manera directa para asegurar una gestión ininterrumpida del Programa.

La ejecución de los proyectos DIM, incluyendo la adquisición de bienes (compra de equipo de cómputo, software, entre otros) y servicios (servicios profesionales de consultoría, servicios de producción editorial, servicios hoteleros y de alimentación, entre otros), se ajustará a los procedimientos y políticas de PNUD para dicha modalidad de proyectos.

Los productos derivados del presente proyecto requieren estar provistos de autonomía e independencia del análisis, rigor académico, legitimidad social y amplitud en la difusión de sus resultados. Los documentos, información obtenida y resultados producidos por el Proyecto serán de propiedad de PNUD. Asimismo, todas las publicaciones elaboradas llevarán el logo del PNUD, los logos de los donantes o contrapartes que apoyen la publicación, apegándose a la normativa del PNUD.

Los servicios que ofrece PNUD para la implementación de las actividades del proyecto tales como, contratación de personal, compras de equipos, adquisiciones de servicios, asistencia técnica específica, serán cubiertos con fondos del proyecto de acuerdo a la política de recuperación de costos de PNUD.

El proyecto será auditado al menos una vez durante su ciclo de vida según las normas administrativas y financieras del PNUD, se deberán prever en el presupuesto del proyecto los recursos necesarios para llevarlo a cabo. El cumplimiento de las recomendaciones de la auditoría será responsabilidad de la dirección del proyecto, y serán monitoreados por el PNUD. Adicionalmente el Programa deberá tener un sistema de archivo e información para reportar las actividades financieras, técnicas, y administrativas, relacionadas con la implementación del Proyecto, de manera que puedan ser consultadas por las entidades de vigilancia y de control del Estado, y por firmas auditoras asignadas por PNUD para tal fin. Los logos del PNUD, del PAJUST, y del donante deberán aparecer en todas las publicaciones elaboradas por el Proyecto.

De acuerdo a los procedimientos estándares del PNUD, los equipos y bienes adquiridos durante la implementación del Proyecto serán propiedad del PNUD hasta que los mismos sean transferidos oficialmente a los socios implementadores. Ambos organismos deberán mantener un inventario de los equipos y bienes comprados a lo largo del Proyecto, mismos que deberán ser actualizados continuamente y reportados anualmente a PNUD. El/la Coordinador-a del Proyecto supervisará el uso correcto y el adecuado mantenimiento de estos equipos y bienes y se asegurará de contratar una póliza de seguro de dichos bienes.

Los fondos asignados para el presente Documento de Proyecto se enmarcan en el Convenio de Cooperación entre PNUD y la Embajada de Suecia y están sujetos a las fluctuaciones del tipo de cambio de las Coronas Suecas respecto al dólar. PNUD realizará revisiones periódicas a las fluctuaciones de la moneda, para determinar la necesidad de realizar ajustes al monto total del proyecto.

Junta de Proyecto

Se establecerá una “Junta de Proyecto” para coordinar los distintos esfuerzos que contribuyen a la gestión del proyecto y monitorear el avance conjunto del mismo, que incluirá e/la Directora/a y el/la Coordinador/a del Proyecto, el/la Directora/a del PNUD, el/la Oficial de Programa, el/la Coordinadora del PAJUST II, el/la Oficial de Monitoreo y Evaluación de PNUD, un representante de Operaciones de PNUD, así como representantes de los Donantes.

La Junta de Proyecto se reunirá al menos dos veces al año, en mayo y noviembre y las veces adicionales que sean necesarias.

En mayo de cada año, la Junta de Proyecto realizará una revisión anual, tomando como base el Informe Anual presentado por la coordinación del Proyecto. Esta revisión anual evaluará el desempeño del Proyecto, el avance de las actividades planificadas durante el año correspondiente, así como la gestión de riesgos según el contexto, lo que ayudará a la definición del plan de trabajo anual para el próximo año. En el último año, esta revisión se realizará como una valoración final del proyecto.

En noviembre de cada año, la Junta de Proyecto realizará una revisión del POA preparado por la Coordinación del Proyecto.

Estas reuniones de revisión permitirán mejorar la coordinación y enriquecerán la articulación, el aprendizaje conjunto y la sinergia del proyecto.

Adicionalmente, cuando sea necesario, la Junta del Proyecto podrá reunirse de forma extraordinaria, para realizar análisis de coyuntura y contexto para retroalimentar la implementación del Programa

Junta de Coordinación Ejecutiva

Se establecerá una “Junta de Coordinación Ejecutiva” de PAJUST, que se reunirá al menos trimestralmente. La JCE estará a cargo de dar seguimiento a las actividades articuladas previstas en PAJUST. La JCE será integrado por:

- 1) El/la Oficial de Programa de PNUD a cargo del PAJUST II;
- 2) El/la Oficial de Monitoreo y Evaluación, de PNUD;
- 3) El Equipo de Coordinación de PAJUST;
- 4) Representantes de todos los socios estatales así como los socios no-estatales apoyados mediante la modalidad NIM;
- 5) Un representante adicional de la sociedad civil por cada mesa temática y
- 6) Un representante del Proyecto Piloto en el Área Ixil;
- 7) Un representante de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos – OACNUDH.
- 8) Dos representantes del Consejo Asesor.

Tanto los socios Estatales como los no-estatales reportarán en este espacio los resultados de las articulaciones implementadas en el trimestre anterior a la reunión bajo los tres niveles:

- 1) Articulación Temática: articulación entre socios Estatales y de la sociedad civil en cada componente de Verdad, Justicia, Reparación y No-repetición.
- 2) Articulación Departamental: articulación entre socios al nivel de los 5 departamentos priorizados.
- 3) Articulación entre componentes: articulación entre los socios Estado y ONG, entre los distintos componentes.

Se promoverán acuerdos entre los participantes para fortalecer las articulaciones y alianzas a cada nivel entre los actores Estatales y no-Estatales para el logro de los resultados acordados.

Los donantes del Programa y los representantes del Consejo Asesor tendrán un espacio asignado para aclarar dudas y ofrecer su asesoría a los socios.

La discusión y los acuerdos alcanzados en cada reunión de la Junta de Coordinación Ejecutiva de PAJUST serán plasmados por el Equipo de Coordinación en una memoria, la cual será compartida con todos los participantes.

Los acuerdos plasmados en la memoria serán monitoreados por el Equipo de Coordinación de PAJUST, y su nivel de implementación discutido en la siguiente reunión.

En la última de reunión de la JCE de cada año, el Equipo de Coordinación de PAJUST presentará una propuesta de POA Articulada para el siguiente año, para la retroalimentación de los participantes.

Consejo Asesor

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Guatemala coordinará el Consejo Asesor del Programa. Durante los primeros tres meses, los demás integrantes del Consejo serán identificados por OACNUDH y PNUD y propuestos a los donantes para su aprobación.

Representantes del Consejo Asesor deberán participar en las reuniones de la Junta del Proyecto y de la Junta de Coordinación Ejecutiva, así como en otras reuniones convocadas por PAJUST de forma extraordinaria, en donde se requiera la asesoría específica del Consejo, desempeñando las funciones detalladas abajo.

Las funciones del Consejo Asesor serán:

- 1) Brindar asesoría sobre el contexto de implementación del Proyecto y la gestión de riesgos;
- 2) Brindar asesoría sobre el Informe Anual del Proyecto;
- 3) Brindar análisis y asesoría al Programa sobre la articulación entre los socios estatales y no-estatales.
- 4) Brindar asesoría al Programa sobre la propuesta de Plan Operativo Anual articulado del Programa.

V. MONITOREO & EVALUACION

De acuerdo a las políticas y procedimientos para la programación del PNUD, el Proyecto será monitoreado a través de los siguientes elementos:

A. Durante el ciclo anual:

- Trimestralmente, se realizará una valoración de la calidad del logro de las actividades, y la información derivada de esta valoración será registrada en el sistema de gerencial del PNUD (sistema Atlas).
- Teniendo en cuenta el Análisis de Riesgo elaborado al inicio del proyecto, se llevará un registro y se actualizará trimestralmente en el sistema Atlas, las medidas correctivas implementadas para mitigar los riesgos y sobre el comportamiento del riesgo (si se reduce, elimina o se incrementa).
- Se llevará un registro trimestral de Lecciones Aprendidas, derivadas de la implementación del Proyecto, asegurando el aprendizaje continuo y la integración de estas lecciones aprendidas dentro de la implementación del Proyecto. Esta información será insumo para la elaboración de los informes anuales y el informe final del Proyecto.
- El/la Oficial de Programa, con el apoyo del equipo de PAJUST, registrará y revisará trimestralmente en Atlas, el calendario sobre las principales actividades de Monitoreo y Evaluación, para llevar control de las mismas. Las actividades de este calendario pueden ser: revisión de planes de trabajo, visitas de monitoreo, revisiones de informes trimestrales, semestrales y anuales, auditorías, evaluaciones de medio término o finales, publicaciones, informes al donante, entre otros.

B. Anualmente:

Se realizará un Informe Anual (o final), que será preparado por la coordinación del Proyecto y será presentado a la Junta del Proyecto en abril de cada año, como insumo para la revisión anual del mismo. Este informe integrará toda la información generada de las actividades de monitoreo que se realizarán durante el año, y también integrará un análisis sobre los avances y logros alcanzados de acuerdo a los productos previstos y las metas anuales.

Al finalizar el año, la Junta de Proyecto realizará una revisión anual, tomando como base el informe anual presentado por la coordinación del Proyecto. Esta revisión anual evaluará el desempeño del Proyecto, el avance de las actividades planificadas durante el año correspondiente, así como la gestión de riesgos según el contexto, lo que ayudará a la definición del plan de trabajo anual para el próximo año. En el último año, esta revisión se realizará como una valoración final del proyecto. Estas reuniones de revisión permitirán mejorar la coordinación y enriquecerán la articulación, el aprendizaje conjunto y la sinergia del proyecto.

VI. ANEXOS

ANEXO I ANÁLISIS DE RIESGOS

ANEXO II PRESUPUESTO

ANEXO III PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ANEXO I: ANALISIS DE RIESGOS

#	Descripción	Fecha	Tipo de Riesgo ⁷⁴	Probabilidad					Impacto					Acciones tomadas para mitigar el riesgo		Estado del riesgo ⁷⁵			
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Fecha	Acciones	E	R	I	N
1	Cambio de gobierno y de las entidades estatales puede interrumpir la continuidad de los procesos de justicia de transición.	Noviembre 2014	Político				x				x				Promover alianzas estratégicas para propiciar la continuidad de los procesos en el contexto de la transición entre autoridades. Incidir a través del dialogo con las nuevas autoridades.				
2	Falta de voluntad política incide en que la agenda legislativa en justicia de transición no avance	Noviembre 2014	Político y legal				x				x				Promoción de alianzas con socios estratégicos y participación en espacios de incidencia y monitoreo de la agenda legislativa en justicia de transición con el Congreso de la Republica.				
3	Falta de voluntad política en el Ministerio de Educación, Ministerio Público, Ministerio de Cultura y Programa Nacional de Resarcimiento y Registro Nacional de Personas para institucionalizar mecanismos de justicia de transición.	Noviembre 2014	Político/Institucional		x							x			Mantener dialogo de alto nivel con instituciones para promover institucionalización de procesos.				
4	Falta de asignación presupuestaria en las instituciones estatales para	Noviembre 2014	Político/Institucional				x				x				Promoción de alianzas con entidades no estatales para				

⁷⁴ Los tipos de riesgo pueden ser: ambiental, financiero, operativo, organizativo, político, legal, estratégico u otro.

⁷⁵ El estado del riesgo puede ser:

E = Eliminado

R = Se reduce

I = Se incrementa

N = No hay cambios

#	Descripción	Fecha	Tipo de Riesgo ⁷⁴	Probabilidad					Impacto					Acciones tomadas para mitigar el riesgo		Estado del riesgo ⁷⁵			
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Fecha	Acciones	E	R	I	N
	institucionalizar los procesos de justicia de transición.														monitoreo e incidencia en asignación presupuestaria.				
5	Declaración de amnistía por vía legislativa y/o judicial sobre los casos del Enfrentamiento Armado Interno.	Noviembre 2014	Judicial/legislativo/político	x								x			Promover alianzas estratégicas para incidir en el cumplimiento de los estándares internacionales relativos a las amnistías.				
6	La motivación de las víctimas del EAI para reclamar sus derechos se reduce.	Noviembre 2014	Social			x						x			Promover estrategias de información y comunicación y atención psico-social para las víctimas del EAI. Promover la inclusión de las víctimas del EAI en los mecanismos de participación ciudadana para las demandas de sus derechos.				
7	Aumento de los ataques a los promotores y defensores de DDHH en el contexto de Justicia de transición.	Noviembre 2014	Social			x					x				Promover estrategias de protección y articulación entre organizaciones de la sociedad civil. Promover estrategias institucionales para protección de defensores de los DDHH.				